

EN LO PRINCIPAL: Evacúa Informe; **OTROSÍ:** Acompaña documentos.

ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL

YORDANA MEHSEN ROJAS Y SOFÍA HÜBNER GARRETÓN, abogadas, en representación del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en autos por reclamación de la Ley N° 20.600, caratulados ***“Cruz Coke Marta Lagos y otros / Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana”***, Rol **R-236-2020**, a SS.I., respetuosamente decimos:

Que, dentro del plazo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 20.600, venimos en informar al tenor de lo ordenado por este Ilustre Tribunal, solicitando el rechazo de la acción de reclamación interpuesta, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen, cuyo índice se contempla al final del presente informe.

I

ANTECEDENTES DE HECHO

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO “CONJUNTO ARMÓNICO PORTEZUELO”

El proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” (“**Proyecto**”) del Inmobiliaria Pocuro SpA. (“**Titular**”), ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“**SEIA**”) mediante una Declaración de Impacto Ambiental (“**DIA**”) admitida a trámite con fecha 13 de septiembre de 2018, siendo calificado ambientalmente favorable por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana (“**COEVA RM**”), por medio de la Resolución Exenta N°467, de fecha 19 de agosto de 2019 (“**RCA N° 467/2018**”).

El Proyecto consiste en la construcción y posterior operación de un proyecto inmobiliario compuesto de 15 edificios (26 torres), desagregados en 9 edificios habitacionales y 6 edificios destinados a *Apart Hotel*, emplazado en Av. Santa Teresa de Los Andes N° 9763, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, siendo sometido al SEIA en virtud de lo establecido en la letra h) del artículo 10° de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (“**Ley N°19.300**”) y el artículo 3° del D.S. N°40/12 Reglamento del SEIA (“**RSEIA**”) que dispone en dicha norma, lo siguiente: “(...) h) *Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. h.1: Se entenderá por Proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjunto de viviendas que contemplen obras de edificación y/o urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento, y que presenten alguna de las siguientes características: (...) h.1.3: Que se emplacen en una superficie igual o superior a siete hectáreas (7 ha) o consulten la construcción de trescientas (300) o más viviendas (...)*”.

Por tanto, el Proyecto ingresó al SEIA debido a que se trata de un proyecto inmobiliario que contempla la construcción de 547 departamentos, 938 unidades de *Apart Hotel* en una superficie total de 10,71 ha., en la comuna de Vitacura, lo cual, supera las 7 ha. y las 300 viviendas, establecidas en el literal h.1.3) del artículo 3, del RSEIA.

Adicionalmente, en conformidad a lo dispuesto en la RCA N°467/2019, el Proyecto tendrá una vida útil indefinida, no se desarrollará por etapas, y no modifica ningún proyecto existente.

2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD DE INVALIDACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA, CUYO RECHAZO DA ORIGEN AL RECURSO DE RECLAMACIÓN DE AUTOS

Con fecha 10 de octubre de 2019, doña Valentina Alejandra Durán Medina y doña Ana Lya Uriarte Rodríguez en representación de doña Marta Lagos Cruz Coke, don Carlos Huneeus Madge, doña Alejandra Victoria Cabrera Pacheco, don José Tevah Castillo, don Christian Díaz Aguilera, doña Mariana Pía Allende Ríos, don Juan Pablo Restini Villasante, doña María Isabel Aliaga Rosson, y doña María Eloísa Morel Montes, solicitan la invalidación de la RCA N° 467/2019.

Posteriormente don Bernardo Arturo De La Maza Bañados representado también por Valentina Alejandra Durán Medina y Ana Lya Uriarte Rodríguez efectúa una presentación con fecha 14 de octubre de 2019, mediante la cual hace suyos cada uno de los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la solicitud de invalidación indicada en el párrafo anterior.

La referida solicitud de invalidación de la RCA N° 467/2019 se fundamentó en los siguientes argumentos:

En primer término, señalan que la evaluación de impacto ambiental fue deficitaria, pues omite elementos esenciales a considerar para asegurar que el proyecto se ajuste a un marco técnico y jurídico que permita fundamentar adecuada y cabalmente la decisión de calificar favorablemente la RCA. Sobre este punto, los solicitantes esgrimen lo siguiente:

- i. Existiría una sub-declaración de efectos relevantes del proyecto en relación a las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago e inadecuada caracterización de los efectos del proyecto respecto de los ejes y objetivos de la misma.
- ii. Existirían incongruencias en cuanto a la relación con las Políticas y Planes evaluados estratégicamente. (Capítulo 5 de la DIA).
- iii. Insuficiente información y consideración de riesgos asociados a la Falla de San Ramón.
- iv. Insuficiente determinación del acto o faena mínima que dará inicio a la ejecución del proyecto.

- v. Insuficiente consideración de los impactos viales.
- vi. Insuficiente consideración de la disposición de residuos peligrosos.
- vii. Insuficiente consideración al elemento ruido.
- viii. Insuficiente consideración de los pronunciamientos de la SEREMI de Desarrollo Social en relación a la alteración de la vida de las personas producto de los impactos viales.
- ix. Asimetría relevante en la participación efectiva en la Evaluación.

En segundo lugar, señalan que, se cometieron actos contrarios a derecho como es la denegación ilegal de la etapa de participación ciudadana, solicitada conforme a derecho por vecinos.

En tercer lugar, indican que el Proyecto debió ingresar al SEIA por la vía de un Estudio de Impacto Ambiental. Respecto a este punto, son dos los temas que los solicitantes esgrimen haberse infringido, los que corresponden al riesgo para la salud de la población (letra a del artículo 11) y la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos (letra c del artículo 11).

3. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN DE AUTOS

En este contexto, con fecha 02 de abril de 2020, las abogadas Valentina Alejandra Durán Medina y Ana Lya Uriarte Rodríguez, en representación de doña Marta Lagos Cruz Coke, don Carlos Huneus Madge, doña Alejandra Victoria Cabrera Pacheco, don José Tevah Castillo, don Christian Díaz Aguilera, doña Mariana Pía Allende Ríos, don Juan Pablo Restini Villasante, doña María Isabel Aliaga Rosson, doña María Eloísa Morel Montes, y don Bernardo Arturo de la Maza Bañados (“**Reclamantes**”), presentaron el recurso de reclamación de autos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales (“**Ley N°20.600**”), en contra de la Res. Exenta N° 113/2020, la cual, tal como fue indicado, rechazó solicitud de invalidación de la RCA N° 467/2019.

Los Reclamantes, en definitiva, solicitan que se declare contraria a derecho la resolución reclamada y se ordene la invalidación de la RCA N° 467/2019.

En concreto, las alegaciones esgrimidas por los Reclamante corresponden a las siguientes:

1. “**Falaz determinación del número de edificios del Proyecto**”.

Alegan los reclamantes, que el titular mencionó en la DIA que el Proyecto se trataría de 15 edificios, cuando en la realidad son 26.

2. “**Insuficiencia de las consideraciones relativas a la Falla de San Ramón**”.

Señalan los reclamantes sobre este punto que “*la Evaluación Ambiental no ha abordado ni rigurosa ni suficientemente este riesgo, por cuanto se ha dado*

conformidad solo sobre la base de un somero e insuficiente descarte del mismo por parte del Titular, en circunstancias que los elementales principios apuntados exigen un análisis más cuidadoso, más aún cuando información posterior a la entregada por el titular del proyecto (que ya hemos señalado es insuficiente y desactualizada) nos ilustra acerca de la existencia cierta de un riesgo que debe ser evaluado con una profundidad que este procedimiento tanto por su naturaleza (se trata de la evaluación de una Declaración de Impacto Ambiental), como por la conducción del mismo (subvaloración del riesgo y renuncia a aplicar en forma cabal el principio preventivo y precautorio) no abordó en forma seria ni adecuada.”

3. **“Respecto a las consideraciones de la Comisión de Evaluación Ambiental sobre la Participación Ciudadana”.**

Esgrimen que “la Comisión de Evaluación sostiene su rechazo a la invalidación, en el punto de la participación ciudadana, en que la resolución correspondiente, siendo resorte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no sería parte de la RCA, que emana de la Comisión de Evaluación Ambiental. Esto desconoce que la RCA, como se dijo, es una resolución integrada de funcionamiento que integra todos los actos trámites previos y que resulta, por lo tanto, impugnabile por todos ellos en el evento que haya existido un vicio.”

4. **“Disposición de residuos peligrosos”.**

Critican que el plazo para retirar este tipo de residuos sea de 6 meses, lo cual debió ser justificado. Agregan que “No se vislumbra la razón por la cual existe esta asimetría entre residuos peligrosos, y los demás. En este sentido, el pronunciamiento de la SEREMI al otorgar el PAS 142 aparece como insuficiente, al determinar que “el titular ha entregado todos los antecedentes relativos al sitio de almacenamiento transitorio de residuos peligrosos generados durante la etapa de construcción del proyecto, por lo que esta autoridad sanitaria se pronuncia conforme y otorga el citado Permiso Ambiental”, sin solicitar antecedentes respecto a las razones para retirar los otros residuos en breves lapsos y mantener por 6 meses justamente los residuos peligrosos.”

5. **“Elemento ruido”.**

Señalan los reclamantes que “La Comisión de Evaluación, al referirse a esta alegación efectuada por nuestra parte, se limita a repetir las medidas de control del considerando 8.1 de la RCA, las que serían obligatorias para el titular, y fiscalizables, añadiendo que la SEREMI de Salud se manifestó conforme. Ningún pronunciamiento existe, sin embargo, sobre que en la ICSARA 1 se pidió mayor precisión de los valores de las emisiones, el período de tiempo en que se producirán, y mayores detalles sobre las medidas de abatimiento y control, lo que no fue cumplido en la Adenda, lo que impide apreciar tanto los niveles de ruido que se producirán como la eficacia de las medidas preventivas.”

6. **“Determinación del acto o faena mínima que dará inicio a la ejecución del proyecto”.**

Señalan que el acto o faena mínima correspondiente al cierre perimetral es *“una cuestión genérica, que no cumple con la función de dar certeza a los interesados de cuándo realmente se está dando inicio al Proyecto. Esto, contra el texto expreso del artículo reglamentario citado por la misma Comisión: éste dispone, en efecto, que la indicación de la gestión, acto o faena mínima de que se trate debe ser “según la naturaleza y tipología del proyecto o actividad”. Un mero cierre perimetral, evidentemente, no cumple con tal exigencia puesto que es una medida que realiza cualquier tipo de faena.”*

7. **“Asimetría entre el titular del proyecto y funcionarios evaluadores, en la visita a terreno”.**

Esgrimen que *“el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” ha transgredido las más elementales consideraciones de igualdad y equilibrio que lo debiesen gobernar”,* puesto que solo asistieron dos funcionarios del SEA y uno de la SEREMI de Desarrollo Social, además de ocho representantes del titular.

8. **“En cuanto al ingreso vía Estudio de Impacto Ambiental”.**

Esta alegación se divide en 2 argumentos referidos a:

i. Riesgo para la salud de la población.

Señalan en este punto, *“que el proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” debió evaluarse vía Estudio de Impacto Ambiental pues a su respecto concurre la causal establecida en el artículo 11 letra a) de la Ley N° 19.300, esto es, riesgo para la salud de las personas.”*

ii. Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

Esgrimen los reclamantes que, *“lo comprometido por el Titular en su DIA no es en absoluto suficiente para precaver los riesgos de saturación vial del área de influencia del Proyecto, lo que impide descartar los efectos de la letra b) del artículo 70 RSEIA.”*

Agregan que *“el sector, en cambio, requiere de planificación por parte de la autoridad que impide estimar que se deban aprobar proyectos inmobiliarios sin haber sido evaluados por un Estudio de Impacto Ambiental, pues solo de esa forma se tendrán los insumos adecuados para que el Proyecto aborde de manera adecuada los impactos que anticipa - con los antecedentes técnicos adecuados - el informe de la consultora especialista, Sra. Gloria Hutt Hesse.”*

Añaden, además, que *“el Titular no puede ampararse enteramente en el EISTU para descartar que el aumento del flujo vehicular vaya a afectar el entorno adyacente en términos de las normas reseñadas. Por tanto, en las ICSARA se debió exigir al Titular*

realizar un análisis más profundo de todas las vías involucradas y la presión previsible sobre las mismas, no bastando solo con el EISTU a estos efectos. El origen de tal insuficiencia, por lo demás, se remonta a haber desdeñado indebidamente el pronunciamiento de la SEREMI de Desarrollo Social en cuanto a la naturaleza jurídica y consiguiente rol del EISTU en un procedimiento como el que nos convoca, pues tal como dicha autoridad sectorial señaló, se trata de un instrumento parcial, de alcance exclusivamente sectorial.”

9. **“Sub-declaración de efectos relevantes del proyecto en relación a las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago”.**

Al respecto señalan los reclamantes que “el titular minimiza en todas sus presentaciones ante la autoridad los efectos que un proyecto inmobiliario como este indudablemente tendrá; y la autoridad evaluadora, inexcusablemente e insubsanablemente, no se hace cargo adecuadamente de rectificar tales deficiencias a lo largo del procedimiento de evaluación.”

Argumentan los reclamantes que “la determinación que hace el Titular de la relación del Proyecto con tales objetivos es completamente insuficiente, llevando a ello a un vicio de la Evaluación Ambiental al no haberse objetado el punto en ninguna de los dos Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la DIA.”

10. **“Aparente Incongruencias en cuanto a la Relación con las Políticas y Planes Evaluados Estratégicamente”.**

Argumentan que el problema se presenta el punto 5.2.1 de la DIA, que aborda el Plan Regulador Comunal de Vitacura, específicamente en lo concerniente al sector R5 de la zona nororiente de la comuna lo que corresponde al sector Lo Curro.

Critican la relación que hace el titular con los objetivos ambientales y el Proyecto, argumentando que “el nexo entre las mitigaciones propuestas y el cumplimiento con las Políticas y Planes Evaluados Estratégicamente es algo que, como mínimo, hubiese requerido de precisión en las Adendas por la vía solicitudes en tal sentido en las ICSARAs, lo que no ocurrió”.

Las alegaciones anteriores carecen de todo fundamento conforme se explicará en el acápite siguiente, en el mismo orden en que han sido planteadas dichas alegaciones.

II

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. ARGUMENTO DE FORMA QUE DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO EN AUTOS - LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE AUTOS ES IMPROCEDENTE DE ACUERDO A LA REGLA DE LA INVALIDACIÓN PROPIA E IMPROPIA

La Solicitud de Invalidación que ha sido rechazada por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, y que ha dado origen a la reclamación de autos, fue presentada fuera del plazo de 30 días exigido conforme al criterio jurisprudencial de la invalidación impropia, lo que determina la improcedencia de la reclamación de autos, **por falta de legitimación activa del reclamante para deducir la acción de reclamación del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600**, conforme se explicará en los párrafos siguientes.

De conformidad al artículo 53 de la Ley N°19.880 “*La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto [...] El acto invalidatorio será siempre impugnabile ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.*”

De acuerdo al texto expuesto, la invalidación corresponde a una potestad que ejerce la Administración, en virtud del poder de “*autotutela*”¹. En este sentido, ha señalado nuestro actual Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, que “*La invalidación se define como la decisión adoptada por la Administración del Estado consistente en la pérdida de eficacia el acto administrativo por razones de ilegalidad. Esta responde a los poderes de autotutela con que cuenta la Administración Pública*” (Énfasis agregado)².

En este sentido, la invalidación es la potestad de la Administración que puede ejercer cuando sus actos son contrarios a derecho, siendo sólo impugnabile el acto invalidatorio, lo cual se justifica en que dicha potestad no es ilimitada.

A diferencia de la potestad invalidatoria previamente indicada, el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, otorga competencia al tribunal ambiental para “*Conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental*” (énfasis agregado) contemplando una **excepción a la regla general** y estableciendo la posibilidad de impugnar un acto que deniega la solicitud de invalidación respectiva.

1 SOTO KLOSS, Eduardo (2007) “La pretendida autotutela invalidatoria de la Administración”, en: *Gaceta Jurídica*, N° 325, pp. 7 y ss; BERMÚDEZ, Jorge (2005) “El principio de la confianza legítima en la actuación de la Administración como límite a la potestad invalidatoria”, en: *Revista de Derecho de Valdivia*, Vol. 18 N° 2, pp. 83-105; GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás (1999), *Curso de derecho administrativo*, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid pp. 479-523. Cap. IX “*Relaciones entre la Administración y Justicia y el Principio de Autotutela*”.

2 BERMÚDEZ SOTO, Jorge (2005), op. cit. pp. 86.

En razón de estas diferencias es que la Excelentísima Corte Suprema, en diversos fallos, ha distinguido entre invalidación propia, también denominada como “invalidación-facultad” e impropia, que también se conoce como “invalidación-recurso”, como es el caso de la sentencia de reemplazo de fecha 17 de junio del año 2016, dictada a propósito del proyecto “**Piscicultura Rupanco**” (Rol N°11.512-2015), sentencia de fecha 16 de agosto de 2016, dictada a propósito del “**Proyecto Inmobiliario Costa Laguna**” (Rol N°16.263-2015)³, y la sentencia, de fecha 25 de junio de 2018, dictada a propósito del proyecto “**Central Hidroeléctrica La Frontera**” (Rol N°44.326-2017).

Respecto del fallo asociado al caso del proyecto “**Inmobiliario Costa Laguna**”, y que replica lo resuelto en la sentencia dictada a propósito del proyecto “**Piscicultura Rupanco**”, es importante destacar lo indicado en los considerandos F y siguientes, los que indican:

*“F.- [...] Que asentado lo anterior es necesario entonces distinguir, por una parte, entre este recurso que denominaremos “invalidación impropia”, y la **invalidación propiamente tal**. Esta última, siempre es procedente, esto es, la Administración, en el plazo de dos años, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley N° 19.880, podrá siempre, de oficio o a petición de parte, “invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado”. Si se formula petición de parte y la autoridad decide no invalidar, entonces no existe ningún recurso, pues se trata, como se ha venido diciendo, de una facultad y no de un recurso. Si, por el contrario, invalida, procede recurso, como señala el inciso final del artículo 53 ya citado. La diferencia está en que aquí el recurso no es ante “los tribunales de justicia”, como se prevé en el artículo 53, sino ante el tribunal ambiental, atendido la competencia que le señala el artículo 17 N° 8, y en el plazo de treinta días que contempla dicha disposición. En esto la única diferencia con la invalidación “normal” es el plazo y el tribunal competente.*

G.- Que, en cuanto a la otra invalidación, vale decir, la invalidación recurso o “invalidación impropia”, es preciso consignar que ella constituye en realidad un reclamo de ilegalidad contra un acto de naturaleza ambiental [...] Este reclamo de ilegalidad abre un “procedimiento administrativo de invalidación” permitiendo al que lo interpuso reclamar de lo resuelto por la Administración, en el plazo de treinta días ante el tribunal ambiental, ya sea porque acogió el reclamo o porque lo rechazó.”

Luego, se refiere al plazo para solicitar la invalidación o más bien el reclamo de ilegalidad ante la autoridad ambiental, afirmando en el considerando H que “*En este sentido, es*

3 Se hace presente que ambos casos dicen relación con Declaraciones de Impacto Ambiental, sin proceso de participación ciudadana, situación similar al caso de autos en el sentido de que se trata de un procedimiento en que no ha existido intervención de terceros (sin perjuicio de que el caso no se vincula a una evaluación ambiental ni modificación de una RCA).

preciso consignar, en primer lugar, que dicho término, sin duda, no corresponde al de dos años que contempla la Ley N° 19.880, previsto para la invalidación-facultad”.

Continúa señalando que, una interpretación armónica de las disposiciones presentes en las Leyes N° 19.300 y N° 20.600 lleva a concluir que “[...] *se debe entender que los terceros ajenos al procedimiento administrativo, así como quienes han intervenido en él, cuentan con treinta días de plazo para este objeto.*” (Énfasis agregado). Lo anterior es sin perjuicio de que, más adelante se agrega que “eventualmente” podría estimarse que los intervinientes tendrían un plazo de 5 días puesto que en realidad estarían interponiendo un recurso de reposición (Considerando I).

Si bien existen dos fallos posteriores de la misma Corte Suprema, que dejan de aplicar el criterio anterior sobre la invalidación propia e impropia (Rol N°45.807-2016 y 31.176-2017⁴), **en la última jurisprudencia de nuestra Excm. Corte Suprema**, específicamente en sentencias de fecha 25 de junio de 2018, causa Rol N° 44.326-2017, y 12 de marzo de 2020, causa Rol N°8737-2018, **ha reiterado la aplicación de dicho criterio**, señalando en la más recientes de estas sentencias que:

“Décimo sexto: Que dilucidado lo anterior, es necesario entonces distinguir, por una parte, entre este recurso que ya ha sido con anterioridad denominado por esta Corte como “invalidación impropia” (CS Roles N°11.512-2015, N°16.263-2015 y 44263-2017) y la invalidación propiamente tal. Esta última siempre es procedente, esto es, la Administración, en el plazo de dos años y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley N°19.880, podrá siempre, de oficio o a petición de parte, “invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado”. Si es a petición de parte y no invalida, no existe ningún recurso pues se trata, como se ha venido diciendo, de una facultad y no de un recurso. Si invalida, procede recurso, como señala el inciso final del artículo 53 ya citado [...]

⁴ En dichas sentencias del Excelentísimo Tribunal, se revocan las sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Ambiental que había rechazado dichas reclamaciones, estimando que dentro del plazo de 2 años a la autoridad no le era posible resolver las solicitudes de invalidación y a su vez cumplir con las formalidades generales de los procedimientos administrativos, **atendido que se trata de un plazo de caducidad que no es procedente suspender ni interrumpir**. De esta manera, se resuelve finalmente acoger las acciones de reclamación en contra de una resolución que declara la inadmisibilidad de una solicitud de invalidación (primera contradicción con la sentencia dictada en causa Rol N°16.263-2015, pues en este caso no se resolvía un procedimiento de invalidación), **no obstante que se trataba de solicitudes de invalidación presentadas fuera del plazo de 30 días** (segunda contradicción con la sentencia dictada en causa Rol N°16.263-2015, al omitir que se trataba de un caso de invalidación propiamente tal, procediendo la acción de reclamación ante el tribunal ambiental sólo cuando existe acto invalidatorio). Las sentencias de casación dictadas en las causas anteriores fueron dictadas con un voto de prevención y un voto en contra (Ministro Sr. Prado), en el primer caso (Rol N°45.807-2016); y con un voto de prevención y dos votos en contra (Ministro Sra. Sandoval y Fiscal Subrogante Sr. Sáez), en el segundo caso (Rol N°31176-2016). Asimismo, para realizar una comparación contextual, se hace presente que, **la sentencia dictada en la causa Rol N°16.263-2015, y que no se condice con los pronunciamientos posteriores, fue dictada sin votos en contra ni de prevención**, concurriendo al fallo, el entonces Ministro Sr. Pedro Pierry, Ministro Sra. María Eugenia Sandoval, Ministro Sr. Carlos Aránguiz, y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos, y Sr. Rodrigo Correa.

***Décimo séptimo:** Que, en cuanto a la otra invalidación, la invalidación recurso o “invalidación impropia”, ella constituye en realidad un reclamo de ilegalidad contra un acto de naturaleza ambiental; un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, con agotamiento previo de la vía administrativa [...]*

***Décimo Octavo:** Que, tratándose, entonces, de un reclamo de ilegalidad, corresponde establecer el plazo para interponerlo en la vía administrativa previa ante la Administración Ambiental; plazo que, según lo razonado hasta ahora, no es el de dos años que señala la Ley N°19.880, destinado para los que se ha llamado “invalidación-facultad”.*

Ahora bien, interpretando armónicamente las disposiciones de las Leyes N°19.300 y N°20.600, no puede llegarse a otra conclusión que el plazo es de 30 días, ya que precisamente ese es el término que se estatuye para los reclamos administrativos y ante el tribunal en las diversas normas de la Ley N°19.300, como por ejemplo en materia de recursos administrativos, en los artículos 20 inciso primero y cuarto; 25 quinquies inciso final y 30 bis inciso quinto. Por ello, que debe entenderse que tanto los terceros ajenos al procedimiento administrativo como quienes han intervenido en él, tienen para todos los efectos legales 30 días de plazo”.

En definitiva, el artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 establece un recurso de reclamación general, el cual de ser utilizado por aquellos quienes fueron parte del proceso de PAC o titulares, quienes deben dar cumplimiento a todos los requisitos procedentes, dentro de ellos, haber presentado la solicitud en la instancia recursiva administrativa dentro del plazo de 30 días.

Hacer esta distinción (entre invalidación propia e impropia), es coherente con una interpretación armónica del artículo 17 N°8, que, **en definitiva crea una nueva vía de impugnación**, una invalidación-recurso o invalidación impropia, **que en realidad corresponde a un reclamo de ilegalidad como bien ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, y cuyo plazo de interposición no puede ser el mismo establecido en el artículo 53 de la Ley N°19.880**, correspondiendo en consecuencia su interposición dentro del plazo de 30 días, que en el caso de autos habían transcurrido.

El tenor literal del artículo 17 N°8 es claro en cuanto señala que es recurrible la resolución que resuelve un procedimiento administrativo, **pero no resulta suficientemente claro en cuanto a si establece o no un nuevo recurso, y cuál es el plazo dentro del cual el mismo debió ser interpuesto en sede administrativa, por ende, es necesario recurrir a su historia o espíritu**, del que no puede sino concluirse que se trata de un nuevo recurso, un reclamo de ilegalidad, respecto a cuya resolución siempre puede impugnarse ante el tribunal ambiental (sea que se hubiese rechazado o acogido el mismo), todo conforme se explica en seguida:

Es manifiesto que, la intención del legislador, al establecer la acción de reclamación del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600 **fue la de crear un nuevo recurso**, y por lo mismo establece la posibilidad de recurrir en contra del acto que deniega la solicitud de invalidación, que en realidad sería un reclamo de ilegalidad, lo cual es evidente, pues la invalidación propiamente tal siempre ha constituido una facultad-potestad de la Administración, pero no un recurso.

Así, cabe citar el Segundo Informe de Comisiones Unidas, en la etapa de discusión de la Ley N°20.600, del cual queda clara la intención de creación de un nuevo recurso asociado a la invalidación para todos aquellos casos no cubiertos, siendo evidente que la invalidación a que se refiere el artículo 17 N°8 corresponde a un recurso distinto de la tradicional invalidación (que no es un recurso) establecida en el artículo 53 de la Ley N°19.880. Se indica en el referido informe: “*El profesor don Luis Cordero complementó la intervención anterior indicando que otro elemento que cabe señalar para comprender mejor el contexto general de las atribuciones de estos nuevos tribunales, es que la mayoría de ellas se originan y están relacionadas con las normas contenidas en la ley N° 20.417.*”

Ahora, en este artículo 5° en discusión, lo que se persigue es sistematizar este conjunto de atribuciones. Informó que en esta materia la Comisión Técnica acogió dos sugerencias que se habían formulado al Ejecutivo en la etapa anterior, durante las observaciones del proyecto: la primera, incorporar la causal que permite revisar que haya actos administrativos que ejecutan planes o normas, que estaban sin recursos, y, la segunda, admitir la posibilidad de reclamación general en contra de actos administrativos ambientales que se consideren ilegales, permitiendo la invalidación. En este caso, informó, el Tribunal Ambiental va a conocer del reclamo después que se resuelva la solicitud de invalidación en sede administrativa. De ese modo, concluyó, se permite recoger una serie de hipótesis que no estaban cubiertas, hasta ahora, en las atribuciones del tribunal”⁵ (énfasis agregado).

*En relación a la materia, el profesor Luis Cordero Vega, quien participó en esta discusión legislativa y citado en el informe antes indicado, ha señalado con posterioridad a la dictación de la respectiva ley, que “Es necesario recordar que existe un amplio consenso en la literatura y en la jurisprudencia que la invalidación **no es un recurso administrativo, sino una facultad de revisión de la autoridad administrativa.** Sin embargo, la manera en que la Ley N° 20.600 (art. 17 N° 8) reguló esta institución es equivalente a un recurso administrativo [...] con agotamiento de la vía administrativa previa [...] para poder acceder a la revisión judicial, en este caso del Juez Ambiental”⁶ (énfasis agregado).*

⁵ Historia de Ley N° 20.600, pp. 414.

⁶ CODERO, Luis (2013), “Los dilemas de la invalidación ambiental: El caso del camino de la fruta”, en: *La Semana Jurídica*, N° 64, Nota al pie N° 6.

En ese mismo sentido, se pronuncia dicho autor en un análisis jurídico publicado con el nombre de *“la Invalidación no es un recurso administrativo”*⁷, señalando que:

“Desde que el año 2003 la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (LBPA), reconoció positivamente la potestad de revisión de oficio de los actos administrativos por razones de ilegalidad —conocida como invalidación (art. 53)— los operadores del derecho han tratado de utilizarla como si fuera un verdadero recurso administrativo, alterando de ese modo el sistema de impugnación de los actos administrativos.

Pareciera razonable no olvidar que la “invalidación” constituye una potestad de revisión de oficio de los actos de la Administración, que se puede ejercer cuando estando en plena vigencia estos, se detecta un vicio de legalidad que no ha podido subsanarse, de modo que se impide que pueda seguir produciendo efectos, potestad que sólo se puede ejercer previa instrucción de un procedimiento administrativo. Históricamente se ha dicho que esta facultad —propia de la autotutela de la Administración— constituye un poder - deber de los organismos administrativos” (énfasis agregado).

Asimismo, con posterioridad, el profesor Cordero Vega señala que *“la lógica del sistema impugnatorio de actos administrativos porque, como he explicado en otro momento, la invalidación no es recurso administrativo, porque mientras la “invalidación” es una potestad reconocida solo a la Administración para resguardar el ordenamiento jurídico como medio extraordinario para volver sobre sus propios actos; los recursos administrativos constituyen un derecho subjetivo público para impugnar las decisiones de una autoridad pública, cuyo propósito es establecer una garantía de los administrados, en cuanto permite la anulación o reforma de un acto administrativo que afecta negativamente sus derechos e intereses legítimos. (Escuín Palop – Belando Garín, 2011)”*⁸.

Más recientemente, el mismo autor señala en el artículo *“Invalidación Ambiental”*⁹, sostuvo lo siguiente:

“Como he planteado con anterioridad, la ley que creó los Tribunales Ambientales (L.20600) incorporó la posibilidad de reclamar del acto administrativo que resolvía una solicitud de invalidación contra un acto administrativo de carácter ambiental (art. 17 Nro. 8). La idea de esa regla era establecer una especie de reclamo de ilegalidad con agotamiento de la vía administrativa previa, es decir, un reconocimiento del “derecho a

⁷ CORDERO, Luis (2013), *“La invalidación no es un recurso”*, en: *El Mercurio Legal*, 27 de noviembre de 2013, disponible en: < <http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Analisis-Juridico/2013/11/27/La-invalidacion-no-es-recurso-administrativo.aspx> > [Consultado el 01/07/2019].

⁸ CORDERO, Luis (2014). “Recursos administrativos e invalidación”, en: *El Mercurio Legal*, 29 de octubre de 2014, disponible en: < <http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Analisis-Juridico/2014/10/29/Recursos-administrativos-e-invalidacion.aspx> > [Consultado el 01/07/2019]

⁹ CORDERO, Luis (2017) “Nuevamente la invalidación ambiental”, en: *El Mercurio legal*, 28 de junio de 2017, disponible en : < <http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Analisis-Juridico/2017/07/28/Nuevamente-la-invalidacion-ambiental.aspx> > [Consultado el 01/07/2019].

la impugnación” general en materia ambiental para hipótesis no cubiertas con reclamaciones especiales, siendo un modo de compensar el listado acotado de competencias de estos tribunales, extendiendo sus atribuciones a otros asuntos distintos a los regulados en la ley 19.300. Dicho recurso implicaba también una limitación —como consta de la historia de su establecimiento ([HL, pp. 262, 263, 270, 509, 614, 615](#))— y era que en el caso de las RCA, una vez resueltos los recursos administrativos o bien vencidos los plazos para su interposición, no se podía ejercer la potestad invalidatoria del art. 53 de la LBPA. La idea del Congreso era dar certezas al acto administrativo terminal de la evaluación ambiental”¹⁰.

Acto seguido, tras resumir el criterio jurisprudencial de la invalidación propia e impropia, el académico Luis Cordero, de manera concreta hace mención a las últimas dos sentencias que descartan dicho criterio de manera implícita, señalando que “Con los dos casos resueltos este mes, la Corte —en sus votos de mayoría— deja sin efecto ese precedente, pero agrega —bajo el mismo argumento sobre el cual implícitamente critica la jurisprudencia anterior— otro criterio jurisprudencial, desnaturalizando explícitamente el plazo establecido en el art. 53 de la LBPA”¹¹ (énfasis agregado).

Aclarado lo anterior, se debe hacer presente que los **reclamantes, con fecha 10 de octubre de 2019 solicitaron la invalidación de la RCA N° 467/2019, de fecha 19 de agosto de 2019**, la que fue publicada en la plataforma electrónica del SEA con fecha 23 de agosto de 2019. De acuerdo a lo anterior, la solicitud de invalidación fue presentada, transcurrido el plazo de 31 días contados después de su publicación, lo que implica que sólo podría tratarse de una invalidación propiamente tal, para ser admitida a trámite (no invalidación impropia que debe ser presentada dentro de 30 días desde la notificación o publicación).

Esta solicitud de invalidación propiamente tal no confiere acción de reclamación ante el Tribunal Ambiental respecto del acto que no es invalidatorio (se rechazó la invalidación), siendo improcedente la acción de reclamación del artículo 17 N°8 de la Ley N°20.600, conforme lo expuesto previamente.

Esta acción sólo hubiese sido procedente respecto del acto invalidatorio aplicando lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N°19.880, que establece la invalidación general (propiamente tal). Pero la invalidación impropia, que confiere acción ante el Tribunal Ambiental tanto respecto del acto invalidatorio como de aquél que no lo es, **debe ser presentada dentro del plazo de 30 días, no habiéndose cumplido con este requisito en el caso de autos.**

¹⁰ CORDERO, Luis (2017) “Nuevamente la invalidación ambiental”, en: *El Mercurio legal*, 28 de junio de 2017, disponible en : < <http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Analisis-Juridico/2017/07/28/Nuevamente-la-invalidacion-ambiental.aspx> > [Consultado el 01/07/2019].

¹¹ *Ibíd.*

En síntesis, conforme a lo antes señalado, los **reclamantes en consecuencia carecen de legitimación activa** para haber deducido la acción de reclamación de autos en cuanto se trata de un caso de invalidación propiamente tal, que es la única que puede solicitarse después de los 30 días, y **sólo existe legitimidad activa para recurrir contra un acto invalidatorio.**

2. ARGUMENTOS DE FONDO Y LA IMPROCEDENCIA DE LAS ALEGACIONES SOSTENIDAS POR LOS RECLAMANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE AUTOS

Previo a entrar en el análisis de cada uno de los argumentos presentados por los reclamantes, es menester señalar que el Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” fue llevado a cabo acorde al marco legal y reglamentario que lo rige. Se elaboró un ICSARA y un ICSARA Complementario, los cuales fueron respondido en tiempo y forma por el titular mediante la Adenda y Adenda Complementaria respectivamente. Asimismo, participaron los distintos Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA), quienes se manifestaron conforme a la evaluación del Proyecto, dentro de los cuales se encuentra la SEREMI de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente, SERNAGEOMIN, Transportes, Obras Públicas, la Municipalidad de Vitacura, entre otros.

En este sentido, el Proyecto durante la evaluación logró acreditar que cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable, que cumple con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales y no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental.

Por lo tanto, esta Dirección Regional estima que todas las supuestas insuficiencias señaladas por la recurrente no son tales, toda vez que estas fueron debidamente abordadas por el titular durante la evaluación y aceptadas tanto por el SEA RM como por los respectivos órganos sectoriales que se pronunciaron conforme a las materias que son de sus competencias, tal como se aborda detalladamente a continuación:

2.1. Supuesta Falacia en la determinación del número de edificios del Proyecto

Los Reclamantes esgrimen que, en la DIA ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el titular declara que el proyecto está constituido por 15 edificios, sin embargo, al presentar previamente el EISTU habían declarado sectorialmente que estos se tratarían de 26.

Al respecto, se indica que, en la DIA, el titular describió su proyecto de la siguiente forma *“El proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” consiste en la construcción y posterior operación de un proyecto inmobiliario compuesto de un total de 15 edificios,*

desagregados en 9 edificios habitacionales y 6 edificios destinados a Apart hotel, en un terreno de 10,7 ha en la comuna de Vitacura.

Los 9 edificios habitacionales tienen altura variable: 2 edificios de 15 pisos y 7 edificios de 5 pisos (éstos últimos con distinta configuración: 1 edificio de 1 módulo, 3 edificios de 2 módulos, 2 edificios de 3 módulos y 1 edificio de 5 módulos), suman 547 departamentos y 1.459 estacionamientos. Los 6 edificios destinados a Apart Hotel tienen una altura de 15 pisos, un total de 938 unidades de Apart hotel (equivalente a 2.660 plazas) y 1.505 estacionamientos”

Por tanto, desde el comienzo se hace una explicación de que 7 de los edificios de 5 pisos iban a tener distintos módulos. A esto se le suma las imágenes acompañadas en dicho documento, las que muestran de manera clara las 26 estructuras que conformarán el Proyecto, siendo alguna de ellas las siguientes:

- Figura 1-4 Planta Georreferenciada del Proyecto
- Figura 1-6 y 1-10. Diagrama Lotes
- Figura 1-7. Ubicación del Canal Metropolitano respecto de las obras del Proyecto.
- Figura 1-11. Distribución de configuración (módulos) de Edificios en el proyecto.
- Figura 1-28. Áreas verdes del Proyecto.
- Figura 1-29. Ubicación de las Etapas del Proyecto
- Figura 1-34. Receptores sensibles al ruido

Adicionalmente, en el punto 1.4 de la DIA “Descripción de las Partes, Acciones y Obras Físicas del Proyecto”, se vuelve hacer una descripción del proyecto respecto a los edificios, y se ilustra mediante la figura 1-11. “Distribución de configuración (módulos) de Edificios en el proyecto”, lo edificios que tendrán distintos números de módulos quedando nuevamente claro que se trata de 26 estructuras.

Por lo tanto, si bien el titular nunca se refirió de manera expresa a 26 edificios, sí mencionó y así se evaluó, los edificios con sus respectivos módulos, sabiendo desde el principio que se trataba de 26 estructuras con la cantidad de pisos que le corresponden a cada una, lo que se pudo desprender tanto de la descripción realizada por el titular como por las figuras presentadas en la DIA.

Creemos importante aclarar al Ilustre Tribunal, que este forma de describir los proyectos inmobiliarios no es nueva ni innovadora por parte de este titular, por tanto se explica – a diferencia de lo que señalan los reclamantes- que sí se evaluó el proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” considerando el número de estructuras erguidas, lo que además suma que el titular señaló la superficie del terreno en el que se emplazará todo el proyecto, los números totales de estacionamientos, el número total de habitantes, el plazo de la fase de construcción, las emisiones atmosféricas y acústicas, el posible impacto vial en ambas

fases, entre otros contenidos, considerando la totalidad del proyecto inmobiliario, lo que es independiente del número de torres que se levanten.

2.2. Supuesta Insuficiencia de las consideraciones relativas a la Falla de San Ramón

Respecto a la supuesta falta de información y consideración de riesgos asociados a la Falla de San Ramón, este Servicio sostiene en primer lugar que el titular presentó antecedentes respecto a esta Falla a lo largo de la evaluación, el cual fue un tema que fue preguntado adicionalmente en el ICSARA.

En este sentido, el titular se expuso sobre este tema en el capítulo 2 de la DIA, específicamente en el acápite 2.1.2.6 donde presentó los antecedentes que justifican la inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11, en lo referente a temas geológicos, adjuntando adicionalmente en el Anexo 8.1 de la DIA un Estudio Geológico, Geomorfológicos y de Riesgos Naturales **realizado el año 2018** y en el Anexo 8.5 un Estudio Geofísico **realizado también el año 2018** por Geodatos S.A.I.C, quienes utilizaron el “Método de Tomografía Sísmica de Refracción”.

En el primero de los estudios se concluye que *“los peligros geológicos asociados a remociones en masa no están presentes en el área de estudio y por lo tanto no existen riesgos asociados a eventos de este tipo por lo que no aplica la Matriz de Riesgo.”* Respecto al peligro sísmico señalan que *“para la Región Metropolitana está asociado principalmente a tres fuentes sísmicas: interplaca, intraplaca y sismos asociados a fuentes corticales superficiales los que ocurren principalmente bajo la Cordillera Principal. El peligro sísmico es un peligro declarado de riesgo variable y que puede ser atenuado mediante técnicas de construcción antisísmica con la aplicación de la norma NCH433. El riesgo asociado sería entre bajo a medio. Como resultado de la actividad sísmica en un lugar dado además de las ondas sísmicas pueden ocurrir desplazamientos del terreno causado por fallas. Para este caso se discute la posible presencia de la Falla San Ramón en el sector del proyecto y analizando la importancia real de ésta. Se concluye estimando que la posible reactivación de la falla San Ramón no solo es potencial sino que además debe considerarse incierta hasta no recabar más antecedentes geológicos, geotectónicos y geofísicos sobre su real potencial de activación. De todos modos, en el área del proyecto no se observaron evidencias de fallas en superficie en los afloramientos de rocas y tampoco en los sedimentos de la parte baja del área de estudio. Con el fin de obtener más antecedentes sobre la presencia o no de la Falla San Ramón en el sector del Proyecto Portezuelo se llevó a cabo un perfil sísmico (tomografía sísmica) en la parte baja de área del proyecto y la interpretación geológica de éste que confirman la inexistencia de la falla. Dado las consideraciones anteriores se concluye que el peligro de desplazamiento por falla no existe en el sector del Proyecto Portezuelo y por lo tanto no existe riesgo asociado.”*

Por su parte, el Estudio Geofísico concluye que *“de la distribución de la velocidad en la sección medida muestra una estratigrafía de 3 capas, una primera unidad que muestra valores bajos de velocidad (en torno a 600 [m/s]) que se puede relacionar a sedimentos no consolidados, bajo esta unidad se observa un cambio de velocidad desde donde se puede definir una segunda unidad que muestra velocidades intermedias entre 800 [m/s] a 1800 [m/s] y que se puede interpretar como sedimentos de regular consolidación. Se observa que esta unidad va disminuyendo su espesor hacia el este, exponiendo potencias que van desde 5 [m] a 20 [m] aproximadamente. Finalmente se observa una tercera unidad de velocidad media a alta con velocidades que superan los 2000 [m/s] y podría corresponder a sedimentos consolidados o roca altera y/o fracturada.*

Se debe recalcar que los resultados geofísicos obtenidos corresponden netamente a respuestas geosísmicas, las que pudieran asociarse a diversos materiales constituyentes del subsuelo, o bien a un mismo material que presenta diferentes condiciones (grado de consolidación, granulometría, alteración, fracturamiento, meteorización, etc.); por lo que se reitera que el aspecto geofísico debe analizarse en conjunto, y de forma complementaria, con otros antecedentes que permitan conclusiones más certeras e integrales acerca de la mecánica de suelos existente en el área de estudio”.

Posteriormente, la Municipalidad de Vitacura mediante ORD. D.M.A.O N° 204 de fecha 10 de octubre de 2018 realiza una observación sobre la referida Falla de San Ramón, la cual es debidamente respondida por el titular en base a la información disponible al respecto. Luego, la Municipalidad se pronuncia conforme mediante ORD. D.M.A.O N°151 de fecha 10 de julio de 2019.

Por otra parte, el órgano competente en la materia SERNAGEOMIN, se pronunció conforme a la DIA mediante ORD. N° 2237 de fecha 08 de octubre de 2018.

Finalmente, mencionar que el titular presentó un Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias, que incluyen medidas preventivas y de control para distintas situaciones, incluyendo riesgos sísmicos. Este se encuentra en la Tabla 1 de la Tabla 19 y en la Tabla 1 de la Tabla 20 ambas de la Adenda y en el Considerando 10.1.2 de la RCA.

Por otra parte, cabe recordar que, en cuanto a compatibilidad territorial, el proyecto es compatible con los usos de suelo establecidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes que le aplican al predio donde se emplazará el Proyecto.

En este sentido, es fundamental hacer presente que el SEIA es un instrumento de gestión ambiental de tercer orden, que requiere de otros instrumentos de gestión ambiental (de primer y segundo orden) para una adecuada gestión ambiental. En consecuencia, el *“SEIA se nutre de otros instrumentos o herramientas de gestión ambiental de mayor relevancia para un adecuado funcionamiento: normas de calidad, de emisión, planes de prevención y descontaminación, pero en materia inmobiliaria los instrumentos de planificación*

territorial cobran una gran relevancia para la evaluación ambiental, determinan el uso de suelo, contemplan la evaluación ambiental estratégica y conllevan procesos de participación ciudadana para su creación [en la EAE]. Los resultados de la evaluación ambiental de proyectos se entienden y justifican a la luz de dichos instrumentos superiores.”¹²

En este sentido el SEIA hace su evaluación ambiental restrictivamente a los proyectos o actividades concretas, que se encuentran emplazados en una ubicación particular y no le corresponde, por ejemplo, el análisis de ubicaciones alternativas.⁴ En este orden de ideas, son los mismos planes reguladores los que determinan las áreas de riesgo de sus comunas, como por ejemplo riesgo de inundación, de afloramiento de napas, de terrenos en pendiente, entre otros.

En el caso particular, de los 11 Certificados de Informaciones Previas presentados en la evaluación, solo 5 hacen mención a distintos tipos de riesgos asociados a los lotes en que se emplazará el Proyecto, los cuales están definidos en el Plan Regulador Comunal de Vitacura. Sin embargo, ninguno de ellos hace mención a la falla de San Ramón como un riesgo inherente de dichos terrenos., que impida el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la zona.

Adicionalmente, en cuanto a los riesgos sísmicos existen normas urbanísticas específicas que van asociadas a la construcción del proyecto, lo que es un análisis y obligación sectorial, ajeno al SEIA.

Lo que sí compete al SEIA es la evaluación de los Planes de Prevención de Contingencias y Emergencias asociados a las eventuales situaciones de riegos, tal como lo describe el Párrafo 2° del Título VI del RSEIA, lo cual fue parte de la evaluación del Proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo”, como fue mencionado en párrafos anteriores.

En este sentido, cobra importancia distinguir entre riesgo e impacto ambiental para efectos del SEIA. Siendo este ultimo definido en el artículo 1 letra k) de la ley 19.300 como *“la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”*, a diferencia de riesgo que es definida por la RAE como la *“contingencia o proximidad de un daño”* y se entiende también como *“el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre, es decir el producto del riesgo específico, y los elementos de riesgo.”¹³*

Por su parte, la letra j) del ya citado artículo 1 de la ley 19.300, define “Evaluación de Impacto Ambiental” como *“el procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación*

¹² Guía para la Descripción de Proyectos Inmobiliarios en el SEIA, pág. 5.

¹³ SUBDERE (junio 2011)

Ambiental, que en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el Impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”.

Pues bien, de las definiciones dadas, se desprende que la finalidad del SEIA es precisamente la de evaluar impactos ambientales, y, por su parte, los riesgos y peligros son considerados y analizados, para efectos del Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias.¹⁴

Por otra parte, si en el contexto del SEIA ha podido predecirse la circunstancia de que un fenómeno natural pueda resultar alterado con ocasión del determinado proyecto – por ejemplo, incrementado su frecuencia o magnitud, - entonces la situación particular deberá evaluarse, toda vez que se trataría de un impacto ambiental. Así también debería confirmarse o descartarse los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, estableciendo, en el primer caso, medidas apropiadas de mitigación, reparación o compensación. En el caso del proyecto “**Central Hidroeléctrica Río Cuervo**”, aun cuando se hubiese acreditado que se generaba el efecto de “sismicidad inducida” o “sismicidad activada”, dicho impacto no parecía encasillarse dentro de los supuestos del artículo 11.¹⁵

Finalmente, basta con señalar que en este caso concreto, el proyecto inmobiliario no aumentará el riesgo de que se genere un evento sísmico que pudiera desencadenar los posibles daños respecto de la falla de San Ramón. Pero sí se hace cargo a través del Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias de realizar gestiones para estar preparados ante casos de peligroso como sería un sismo.

2.3. Respetto a las consideraciones de la Comisión de Evaluación Ambiental sobre la Participación Ciudadana.

Los reclamantes argumentan que la Comisión de Evaluación sostiene su rechazo a la invalidación, en el punto de la participación ciudadana, en que la resolución correspondiente, siendo resorte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no sería parte de la RCA, que emana de la Comisión de Evaluación Ambiental.

Añaden además, que el Proyecto en análisis sí generaría cargas ambientales, por lo que debió proceder la participación ciudadana.

En primer lugar, es preciso señalar al Ilustre Tribunal que, en la solicitud de invalidación llevada a cabo en sede administrativa, los solicitantes requerían la invalidación de la Resolución Exenta N° 617 de 20 de noviembre de 2018, que resolvió negativamente la

¹⁴ Mehsen, Yordana, (2019) “De la gestión de Riesgos en el Marco del Desarrollo Sostenible”, página 123.

¹⁵ Para más detalle véase Mehsen Yordana (2019) “De la gestión de Riesgos en el Marco del Desarrollo Sostenible”.

solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana y la Resolución Exenta N° 0019 de 16 de enero de 2019 que resuelve también negativamente la solicitud de reposición presentada por los solicitantes de la PAC. Sin embargo, estas resoluciones fueron emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la Comisión.

Al respecto, es importante considerar dos aspectos: En primer lugar, se trata de resoluciones diversas a la RCA, y fue precisamente sobre esta última la que recayó la solicitud de invalidación. Por tanto, solicitan sobre este punto en particular la invalidación de resoluciones distintas sobre las cuales versó el recurso. En segundo lugar, cabe indicar que dichas resoluciones que aluden los reclamantes se tratan de resoluciones emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la Comisión de Evaluación quién fuere el órgano que dictó la RCA. Por tanto, mal puede la Comisión invalidar una resolución que no ha sido dictada por esta.

En segundo lugar, y de manera específica sobre la apertura de un proceso de participación ciudadana, es posible señalar que los proyectos inmobiliarios en general, no cumplen con los requisitos señalados en los incisos sexto y séptimo del artículo 94° del RSEIA, es decir, **no corresponde a las tipologías a.1, b), c), d), e), f), j) y o) del artículo 3 del Reglamento del SEIA**, y que son los proyectos en los cuales se puede decretar la apertura de un proceso de Participación Ciudadana, ni **tampoco genera cargas ambientales para las comunidades próximas**.

Al respecto, es importante tener presente que el concepto de “cargas ambientales” se encuentra definido en el inciso 6° del artículo 30° bis de la Ley N°19.300, en los siguientes términos: *“Para los efectos de este artículo, se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación”*.

Del análisis de la definición recién citada, se desprende que ella está compuesta por dos elementos copulativos:

- (i) Los beneficios sociales.
- (ii) Las externalidades ambientales negativas.

En virtud de lo anterior, este Servicio considera que el primer elemento señalado, esto es, la generación de beneficios sociales, no se verifica respecto del proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo”.

Lo anterior, debido a que es un proyecto de carácter inmobiliario, y la tipología principal de su ingreso al SEIA es la señalada en el literal h.1.3 del artículo 3° del Reglamento del SEIA (“D.S. N° 40/2012”) que establece lo siguiente:

“h) Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas.

h.1. Se entenderá por proyectos inmobiliarios aquellos loteos o conjuntos de viviendas que contemplen obras de edificación y/o urbanización, así como los proyectos destinados a equipamiento, y que presenten alguna de las siguientes características:

h.1.3. Que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas o consulten la construcción de 300 o más viviendas;”

En este contexto, el proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” ingresó al SEIA por emplazarse en un terreno de una superficie total de 10,71 hectáreas y contempla la construcción de 547 departamentos y 938 unidades de Apart Hotel.

Ahora bien, cabe señalar que para que exista Beneficio Social, se debe cumplir el requisito de configurar el concepto de “carga ambiental”. Para ello se requiere la existencia de dos elementos copulativos, como lo son las externalidades ambientales negativas en las comunidades próximas y la existencia de beneficio social derivado del proyecto.

Este beneficio social, debe ser directo y se debe analizar a la luz del objetivo particular de cada proyecto o actividad, confrontado con las necesidades básicas de la comunidad o localidad próxima afectada. Por tanto, no sería la generación de cualquier beneficio, ni de un beneficio económico para un titular o para una determinada persona o grupo, sino que de una **característica inherente** a determinadas obras y actividades que satisfacen directamente dichas necesidades básicas de la sociedad, como son: necesidades de agua potable, saneamiento y de energía. Es por ello por lo que el análisis debe centrarse en la referencia realizada por el legislador a la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad, contenida en el artículo 94° del RSEIA inciso 7°: “(...) *así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en **satisfacer necesidades básicas de la comunidad**, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros.*” (énfasis agregado). Así, la generación del beneficio social se debe entender como la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad durante las fases de construcción, operación y/o cierre de un proyecto o actividad. A modo de ejemplo, el mismo inciso 7° del artículo 94° del RSEIA, se refiere a proyectos de saneamiento, agua potable y energía, los cuales justamente satisfacen necesidades básicas de la sociedad.

Lo anterior, está plenamente de acuerdo a la voluntad del legislador al establecer el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300. En efecto, del análisis de la Historia de la Ley N° 20.417, se advierte que, en un principio durante la discusión legislativa de la referida ley, el proceso de participación ciudadana aplicaba para todas las DIAs sin hacer una distinción entre aquellas que generaban o no cargas ambientales. Sin embargo, mediante Indicación N° 35; 412 Bis. del Boletín de Indicaciones del Senado y del Ejecutivo N° 5.947-12 de la Ley N° 20.417, de fecha 27 de octubre de 2009 (en adelante “Indicación”),

se propuso que el proceso de participación ciudadana en DIA solo procediera en caso que los proyectos generasen cargas ambientales para las comunidades próximas.

En este orden de ideas es preciso ahondar que hoy en día existe un proceso de reforma del SEIA tramitándose en el Congreso – Boletín N° 12.714-12 – donde una de las modificaciones consiste precisamente en ampliar y mejorar los espacios de participación ciudadana, donde se busca que se realice participación ciudadana “en todos los procesos de evaluación ambiental, sin importar que ingresen al SEIA vía Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. De esta manera, se elimina una de las últimas restricciones existentes, que circunscribía la participación solo a las Declaraciones de Impacto Ambiental con cargas ambientales, y que fueran aceptadas como tales por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.”¹

Por lo tanto, ante la legislación vigente al día de hoy, no es posible otorgar participación ciudadana a todos los proyectos que ingresen vía Declaración de Impacto Ambiental, sino que es una facultad de la Directora Regional, en este caso, decretar su apertura cuando así lo soliciten respecto de los proyectos enmarcados en las tipologías señaladas expresamente en el art. 94 del RSEIA o en aquellos proyectos que como se indicó satisfacen necesidades básicas de la sociedad, que en el caso en concreto no se configura.

En este contexto, los fundamentos esgrimidos por los reclamantes- esto es generación de empleos y mayor actividad económica - no corresponden a beneficios sociales en los términos requeridos por el artículo 30° bis de la Ley N° 19.300 y el artículo 94° del RSEIA, debido a que, de la descripción y finalidad del Proyecto en análisis, resulta manifiesto que éste no pretende satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, puesto que el proyecto se centra en la construcción de viviendas, las que no benefician a una comunidad toda sino que a un grupo determinado de personas.

A mayor abundamiento, se debe hacer presente que la Jurisprudencia se ha pronunciado en un sentido restrictivo respecto del concepto de beneficio social, señalando la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 56.768 -2017, referido al proyecto inmobiliario denominado “Edificio Quilín A” que *“debe entenderse que generan beneficios sociales aquellos proyectos o actividades cuyo objetivo consista en satisfacer directamente necesidades básicas para la comunidad, pero que evidentemente no se trata de la generación de cualquier beneficio, ni de un beneficio económico para un titular o para una determinada persona o grupo, sino que de una característica inherente a determinadas obras y actividades que satisfacen necesidades de carácter colectivo y se traducen en una mejora del nivel de bienestar social o condiciones de vida de la población, pero que, al mismo tiempo, conllevan externalidades negativas para una determinada comunidad o localidad”*, criterio que ha sido confirmado reiteradamente por nuestros tribunales superiores de justicia (Corte Suprema, Rol N° 42.358-2017; Corte Suprema, Rol N° 37316 - 2017; Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 41237 - 2017).

Asimismo, los reclamantes citan como argumento para que proceda la PAC lo resuelto por la Corte Suprema respecto al Proyecto ***“Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”*** (Rol 55.203-2016). Sin embargo, este fallo se dictó a propósito de un proyecto minero en cambio el proyecto en cuestión es inmobiliario y cuya ejecución se agota con la construcción de las torres. **En este sentido, no debemos olvidarnos de los efectos relativos de las sentencias, y que su aplicación concreta tuvo lugar en respecto de un proyecto minero, no así el caso de la sentencia asociada al proyecto Edificio Quilín A que, sí tiene el carácter de inmobiliario como es el de autos, y que por ende, podríamos aplicar por analogía.**

Así mismo, cobra importancia explicar que respecto a los proyectos inmobiliarios en sí, éstos ingresan al SEIA en virtud del literal h) del artículo 10 de la Ley N° 19.300, puesto que se trata de proyectos inmobiliarios que se ejecuta en una zona latente o saturada. En este sentido, es esencial señalar que los proyectos inmobiliarios deben ingresar al SEIA para su evaluación sólo en función de que se ejecutan en zonas declaradas latentes o saturadas, como es el caso de la Región Metropolitana la cual fue declarada mediante Decreto N° 131 de 1996 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia como zona saturada por ozono, material particulado respirable, partículas en suspensión y monóxido de carbono, y latente por dióxido de nitrógeno. Adicionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente mediante Decreto N° 67, declara como zona saturada por material particulado fino respirable MP 2,5 como concentración de 24 horas a la Región Metropolitana.

Por ende, el proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” se debe evaluar ambientalmente precisamente por ubicarse en la Región Metropolitana y por consiguiente debe hacerse un análisis específico respecto a las emisiones atmosféricas que generará el Proyecto a la luz del Decreto N° 31/2016 que Establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para esta región, y en concreto respecto al artículo 64 de dicho cuerpo legal, para determinar si este debe o no compensar sus emisiones. De manera complementaria *“se pone acento en los objetos de protección relacionados: riesgo para la salud de las personas y efectos en el medio ambiente haciendo énfasis en la descripción de proyectos respecto a las partes, obras y acciones que puedan ocasionar impactos significativos en los componentes ambientales regulados principalmente a través de normas de calidad.”* En consecuencia, este Proyecto inmobiliario se evalúa ambientalmente en virtud de las emisiones que generará y los impactos asociado a ello.

A mayor abundamiento, la Dirección Ejecutiva a través de la Resolución Exenta N° 0893/2019 de 23 de agosto de 2019 la que se pronuncia sobre recurso Jerárquico interpuesto en contra de Resolución Exenta N°0181, de fecha 29 de marzo de 2019, de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, que rechaza solicitudes de inicio de PAC, en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **“Hijuelas Quilín”**, señaló que *“cabe recordar que los proyectos inmobiliarios ingresan al SEIA por aplicación del literal h del artículo 3 del RSEIA,*

referido a proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas saturadas o latentes. De esta forma, los impactos principales por los cuales el legislador determinó que fueran sometidos al SEIA, son las emisiones atmosféricas y no temas de urbanismo o planificación territorial.” (énfasis agregado).

Y en tercer y último lugar, en lo que respecta a la radiodifusión, recalcar nuevamente que tanto el texto del extracto como la radio utilizada cumplen cabalmente con el radio de cobertura, el contenido, las fechas y los horarios definidos por el Instructivo para la aplicación del artículo 87 del Reglamento del SEIA dictado por la Dirección Ejecutiva del SEA mediante Ord. N° 150410 de 20 de febrero de 2015. Adicionalmente, la publicación de que el Proyecto había ingresado al SEIA fue a su vez publicado en el Diario Oficial y en el Diario La Tercera, conforme lo establece el artículo 30 de la Ley N° 19.300.

Si bien los reclamantes alegan que no fueron debidamente informados sobre el proyecto, no es menos cierto que como ellos mismo mencionan, en el procedimiento hubo solicitud de participación ciudadana presentada dentro de plazo, lo que da cuenta que sí hubo conocimiento e información respecto del Proyecto, siendo incluso alguno de aquellos solicitantes los mismos reclamantes.

2.4. Sobre la Disposición de Residuos Peligrosos

En esta alegación, los reclamantes critican que el plazo para retirar los residuos peligrosos sea de 6 meses, lo cual debió ser justificado, existiendo a su vez una asimetría entre residuos peligrosos, y los demás tipos de residuos.

Sin embargo, respecto a la disposición de residuos peligrosos, es importante aclarar, que la distinción entre los distintos residuos (peligrosos y no peligrosos) no es arbitraria ni ilegal, sino que estos tienen manejos distintos y se rigen por normativas diferentes.

Es en este sentido que el titular durante la evaluación del Proyecto, aclaró cómo iba a ser la gestión de los residuos peligrosos generados durante la fase de construcción, indicando la forma de almacenamiento, transporte y disposición final, lo que cumplirá con el Decreto Supremo N° 148 que establece el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, emitido por el Ministerio de Salud el año 2003.

Es en este sentido, tanto el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), señalan en sus puntos 4.6.5.2 y 4.3.5.2 respectivamente el tipo y cantidad de residuos peligrosos a generar durante la fase de construcción; que el transporte se realizará por una empresa autorizada y; que la disposición de estos residuos se realizará en un lugar autorizado por la Autoridad Sanitaria. Además, los puntos 4.2 del ICE y 4.3.1.1 de la RCA señalan que se contará con una bodega temporal de almacenamiento para estos residuos. Todo conforme al indicado Decreto N°148/2003.

Además, vale la pena explicar que el proyecto cumple con los requisitos contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales señalados en el artículo 140 del RSEIA referido al “Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase” y del artículo 142 del RSEIA referido al “Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos”. Por tanto, queda de manifiesto que se trata de contenidos distintos y modos diversos para su almacenamiento y disposición.

Al respecto, la SEREMI de Salud, autoridad competente en la materia, mediante ORD. N° 590 de fecha 24 de enero de 2019 se pronuncia conforme.

Por último, es importante recalcar que, el artículo 31 de D.S N° 148/2003, señala de manera expresa que *“el período de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses”*, añadiendo que *“en casos justificados, se podrá solicitar a la Autoridad Sanitaria, una extensión de dicho período hasta por un lapso igual, para lo cual se deberá presentar un informe técnico.”*

Por tanto, a diferencia de lo que señalan los reclamantes, la normativa aplicable en estos casos, no exige que el almacenamiento de residuos peligrosos por un periodo máximo de 6 meses deba ser justificados, sino que exige de manera expresa que se justifique ante la autoridad respectiva, en aquellos casos que se requiera el almacenamiento de residuos peligrosos por un tiempo superior a 6 meses.

En consecuencia, no se vislumbra que exista una asimetría respecto de otros residuos, puesto que como mencionamos les aplican normativas diferentes, así como tampoco el titular estaba en la obligación de justificar o exponer una razón por la cual el almacenamiento de los residuos peligroso iba a ser por un periodo máximo de 6 meses. Es más, para ello, solicitó el Permiso Ambiental Sectorial correspondiente que da cuenta que el almacenamiento de estos será acorde a la normativa aplicable, y a su vez, la autoridad competente en la materia se manifestó conforme.

2.5. Sobre el Elemento Ruido

En esta alegación, los reclamantes señalan que en el ICSARA se pidió mayor precisión de los valores de las emisiones, el período de tiempo en que se producirán, y mayores detalles sobre las medidas de abatimiento y control, lo que no fue cumplido en la Adenda, lo que impide apreciar tanto los niveles de ruido que se producirán como la eficacia de las medidas preventivas.

Respecto a la consideración del elemento ruido, es posible señalar que el Proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” debe dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 38/2011

del Ministerio de Medio Ambiente que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica”. Esta norma establece ciertos parámetros cuyo cumplimiento es obligación para efectos de obtener una RCA favorable.

Así las cosas, durante la evaluación ambiental el titular mediante un estudio específico de ruido y vibraciones (adjunto en el Anexo N° 6 de la DIA) señaló los potenciales receptores del ruido a generar producto del Proyecto, además estimó los niveles de ruido y vibraciones que se generarán durante las fases de construcción y operación. Luego de ello, estableció ciertas medidas de control destinadas a disminuir las emisiones acústicas y de esta forma dar cumplimiento a los límites establecidos por el referido Decreto.

Respecto a lo señalado por los reclamantes, donde según ellos se le solicita al titular en el ICSARA 1 *“mayor precisión de los valores de las emisiones, el período de tiempo en que se producirán, y mayores detalles sobre las medidas de abatimiento y control, lo que no fue cumplido en la Adenda”*, que el titular en la Adenda hace referencia al ruido en varias oportunidades, como es por ejemplo en la Tabla 9 de dicho documento referido a las Acciones del proyecto, donde menciona respecto a las faenas constructivas el horario de funcionamiento según Ordenanza Sobre Ruidos y Sonidos Molestos de la Municipalidad de Vitacura.

Posteriormente, en el punto 1.24 se le pide presentar la información para ambas fases sobre las emisiones, efluentes y residuos generados por el proyecto de acuerdo al formato indicado, donde de manera específica sobre el ruido se solicita *“Valor de la emisión, periodo de tiempo en que se generan las emisiones, sistema de abatimiento o control si se contempla y otra información relacionada relevante para acreditar la inexistencia de impactos del art. 11 de la Ley N°19”*. Esto es respondido por el titular en la Tabla 12 de la Adenda donde señala lo siguiente respecto a la fase de construcción:

“Estas actividades de construcción tales como tránsito de vehículos y maquinarias, transporte y manipulación de materiales, excedentes de excavaciones generan emisiones de ruido.

*Cabe señalar que el Estudio Acústico (Anexo 6) del proyecto considera las emisiones de ruido generadas por la materialización de las mitigaciones viales descritas en el EISTU, principalmente las medidas descritas en el punto n°7 del EISTU aprobado mediante ORD. SM/AGD/N°8758/2017 de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana (ver Anexo 1.2) conforme a lo indicado en la **Guía para la Descripción de la Acción Del Transporte Terrestre en el SEIA** (SEA, 2017).*

De acuerdo a los resultados obtenidos en algunos receptores sensibles, tanto exteriores como interiores, se evidencia la superación de los límites normativos, es por ello que se adoptaron una serie de medidas de abatimiento

y control, que con su correcta implementación se verifica el cumplimiento de la norma en todos los puntos evaluados, tal como se describe en el capítulo 7.1 del Anexo 6 de la DIA.

Medidas de control de ruido: Las medidas de control de ruido, para asegurar el cumplimiento normativo depende de la ubicación del receptor y de la etapa del proyecto. La ubicación y características para cada etapa de construcción, se presentan en el Anexo 6 de la DIA, y se agrupan en las siguientes medidas:

Medidas a Nivel de suelo:

- **Barreras Acústicas:** Se implementarán Cierres Perimetrales con características de Barrera Acústica cuyo material cumplirá con condiciones de densidad volumétrica igual o superior a 660 kg/m^3 (ejemplo: paneles de madera OSB de 15mm. de espesor o material equivalente). Las juntas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad.
- **Restricción con túnel para camión mixer:** En todas las etapas, en especial las etapas 2.3 y 2.4; al estar muy cercanas a receptores a gran altura, quedan expuestas al ruido de las maquinarias y equipos más ruidosos. Una de las máquinas más ruidosas de todas las faenas de construcción, y con mayor frecuencia de utilización es el camión mixer con su sistema de bombeo de concreto. El área de descarga del camión Mixer debe estar protegida por un túnel, que tiene por objeto confinar el ruido producido por el camión. La materialidad de este túnel puede ser planchas de OSB de 15mm, o similar. En su interior debe presentar material absorbente, como por ejemplo paneles de lana de vidrio, los cuales deben estar recubiertos con una tela permeable, como por ejemplo una malla raschel. La siguiente figura ilustra un tipo de túnel a implementar.

Medidas en altura:

- **Cierre de vanos:** Se implementará el Cierre de Vanos que consiste en confinar emisión de ruido de trabajos al interior de la obra gruesa construida, cubriendo ventanas y sectores abiertos de la obra gruesa con planchas de madera o similar que cumpla con condiciones de densidad volumétrica igual o superior a 660 kg/m^3 (ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm. de espesor). Esta medida se irá desplazando por los pisos a medida que se construya el edificio, como se muestra en la siguiente figura referencial:

Si bien no se consideran en los cálculos para la evaluación normativa, adicionalmente el Proyecto contempla implementarán algunas medidas de gestión durante la fase de construcción, a cargo de personal capacitado para supervisar el cumplimiento de ellas, las cuales no son evaluables

cuantitativamente pero contribuyen principalmente a disminuir las posibles molestias a la comunidad. Éstas se indican a continuación:

- *Evitar el paso innecesario de maquinaria pesada y en general la instalación de cualquier fuente ruidosa próxima a inmuebles aledaños.*
- *Correcta utilización de los equipos que tengan por defecto sistemas de control de ruido, como por ejemplo no abrir compuertas de maquinaria que tenga cabina de insonorización.*
- *Limitar el número y duración del equipo que está ocioso en el sitio; especialmente el generado por el motor de los camiones tolva y máquinas de hormigonado durante el período de espera; y el uso de herramientas manuales movidas por aire comprimido.*
- *Todos los equipos utilizados en el sitio de la construcción tendrán los sistemas de escape y silenciadores que hayan sido recomendados por el fabricante para mantener el ruido asociado más bajo y tendrán sus mantenciones al día.*
- *Configurar la faena de construcción de una manera que mantenga el equipamiento y las actividades ruidosas tan lejos como sea posible de los receptores.*

Para el manejo y gestión de Emisiones de Ruido generados durante la construcción se tendrá en consideración la “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la construcción” (Cámara Chilena de la Construcción. Comisión de Protección del Medio Ambiente, 2010).

*Si bien el Proyecto tiene asociada la emisión de Ruido, de acuerdo con los antecedentes presentados en el Anexo 6 de la DIA y los resultados obtenidos, es posible concluir que dichas emisiones, bajo las condiciones más desfavorables y considerando las medidas de control incorporadas en el diseño del Proyecto, no superarán los valores establecidos por la normativa vigente y **por lo tanto no generan riesgo para la salud de la población en virtud de lo definido en el Artículo 5 del Reglamento del SEIA (D.S N° 40/2012 del MMA)***

Mayores detalles en acápite 1.5.7.2 y Anexo 6 de la DIA”

Luego para la fase de operación señalan lo siguiente:

“Todos los puntos receptores exteriores presentan cumplimiento normativo, para período diurno y nocturno según los límites establecidos por el D.S. 38/11 del MMA para Zona III.

De acuerdo a los resultados obtenidos en algunos receptores interiores, se evidencia la superación de los límites normativos nocturnos debido a la operación de los edificios, correspondiente a la descarga de gases de los grupos electrógenos de emergencia con que contará el Proyecto. Para ello

se ha adoptado una medida de abatimiento consistente en un silenciador tipo crítico en la salida de gases.

Como se puede apreciar en el Anexo 6 de la DIA, y considerando la medida de abatimiento descrita más adelante, la emisión de ruido de la fase de operación del Proyecto, dará cumplimiento al límite máximo permisible nocturno (más restrictivo) en todos los receptores evaluados.

Considerando las características del Proyecto y con el objetivo de proteger de las emisiones de ruido a los habitantes de los edificios, la descarga del grupo electrógeno contará con un silenciador tipo crítico que proveerá al menos 29 dB de pérdida por inserción, de manera conservadora.

No obstante lo anterior, una vez instalado el equipo Generador Eléctrico se contempla efectuar una medición desde el departamento más cercano antes de que sea habitado, a modo de corroborar y cuantificar en la práctica, la existencia de superación de los límites aplicables y determinar del diseño más específico de la medida de control de ruido antes citada.

Mayores detalles en acápite 1.6.9.2 y Anexo 6 de la DIA.”

Lo anterior también es mencionado en la Tabla 113 de la Adenda, respecto a la “Justificación de Inexistencia de ECC de la letra a) del art. 11 de la Ley, señalando las medidas de control y de gestión entre otras cosas.

Por tanto, no es efectivo lo indicado por los reclamantes respecto al ICSARA, puesto que lo ahí indicado no era una pregunta adicional sobre las modelaciones presentadas en el Estudio Acústico del Anexo 6 de la DIA, sino que dichas preguntas obedecían a rellenar la tabla solicitada por el SEA con un formato determinado.

Es por ello que las medidas de control propuestas por el titular, en dicho Anexo 6, quedaron plasmadas en el Considerando 8.1 de la RCA N° 467/2019, las cuales corresponden a exigencias relacionadas con el horario de funcionamiento de las obras, a la implementación de barreas acústicas, cierre de vanos, túneles acústicos, no utilizar simultáneamente el rodillo compactador y el rodillo vibratorio y otras medidas de gestión tales como (i) evitar el paso innecesario de maquinaria pesada y en general la instalación de cualquier fuente ruidosa próxima a inmuebles aledaños. (ii) Correcta utilización de los equipos que tengan por defecto sistemas de control de ruido, como por ejemplo no abrir compuertas de maquinaria que tenga cabina de insonorización. (iii) Limitar el número y duración del equipo que está ocioso en el sitio; especialmente el generado por el motor de los camiones tolva y máquinas de hormigonado durante el período de espera; y el uso de herramientas manuales movidas por aire comprimido. (iv) Todos los equipos utilizados en el sitio de la construcción, tendrán los sistemas de escape y silenciadores

que hayan sido recomendados por el fabricante para mantener el ruido asociado más bajo y tendrán sus mantenciones al día. (v) Configurar la faena de construcción de una manera que mantenga el equipamiento y las actividades ruidosas tan lejos como sea posible de los receptores.

A lo anterior se le suma que tanto las medidas de control como las de gestión son obligatorias para el titular y fiscalizables, de manera que este deberá dar cumplimiento de manera íntegra a cada una de ellas.

Finalmente, la SEREMI de Salud, Servicio con competencia en esta materia, mediante ORD. N° 590 de fecha 24 de enero de 2019 se pronuncia conforme sobre este componente.

2.6. Sobre la Determinación del Acto o Faena Mínima que dará inicio a la ejecución del Proyecto

Sostienen los reclamantes que el cierre perimetral corresponde a una cuestión genérica y no podría ser considerado como un acto o faena mínima que dé inicio a la ejecución, para un proyecto inmobiliario.

Sobre este punto resulta esencial citar el artículo 16 del Reglamento que indica sobre el Establecimiento del inicio de ejecución del proyecto lo siguiente:

“El Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá indicar la gestión, acto o faena mínima que, según la naturaleza y tipología del proyecto o actividad, dé cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente. Dicha gestión, acto o faena mínima será considerada como inicio de la ejecución del proyecto para efectos del artículo 25 ter de la Ley.”

En la RCA que se intenta invalidar, quedó establecido en el Considerando 4.1 que el acto o faena mínima será el cierre perimetral. Este es cuestionado por los reclamantes toda vez que consideran que se trataría de un acto más bien genérico, que aplicaría a cualquier tipo de proyecto, y no es específico para un proyecto inmobiliario, sin determinar cuál acto o faena mínima según su criterio sería el apropiado para este tipo de proyecto.

En este sentido, los reclamantes únicamente critican la *“liviandad y falta de rigurosidad en la evaluación ambiental y la incomprensible laxitud por parte de la autoridad administrativa en la tarea que le ha sido asignada en cuanto a velar por el cumplimiento de la ley en forma cabal: desde luego un cierre perimetral como actividad o faena mínima que dará inicio a la ejecución del proyecto no se sostiene si se la compara con el texto reglamentario que exige que esta corresponda a tal “según la naturaleza y tipología del proyecto o actividad”*.

Sin embargo, es importante mencionar que la determinación del acto a faena mínima se establece para efectos de tener un hito de inicio para el conteo del plazo para decretar la caducidad de una RCA. En este sentido, la instalación del cierre perimetral establecido en el Considerando 4.1 de la RCA, cumple a cabalidad con lo expresado en el artículo citado. Es evidente, que posteriormente vendrán otras acciones que irán conformando el desarrollo del Proyecto, pero el Reglamento solo exige uno de ellos, que será el que dé cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente. Por ende, el cierre perimetral del terreno, a juicio de este Servicio, sí cumple con lo preceptuado por la disposición reglamentaria.

2.7. Sobre la Aparente asimetría entre el titular del proyecto y funcionarios evaluadores, en la visita a terreno.

Señalan los reclamantes que *“el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” ha transgredido las más elementales consideraciones de igualdad y equilibrio que lo debiesen gobernar”*, puesto que solo asistieron a la visita a terreno, dos funcionarios del SEA y uno de la SEREMI de Desarrollo Social, además de ocho representantes del titular.

En primer lugar, es fundamental dejar claro que es deber del Estado velar por el bien común tal como lo señala el inciso cuarto del artículo primero de la Constitución Política de la Republica, que establece que *“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.”*

Por tanto, no es posible vislumbrar la existencia de una supuesta asimetría entre las partes involucradas, toda vez que el SEA como Órgano del Estado no está por los intereses de uno u otro, sino que de predecir posibles impactos en virtud del principio preventivo que le rige. Por tanto, debe velar para que éstos se aborden correctamente durante la evaluación y que el titular del proyecto se haga cargo de los mismo de manera efectiva.

En segundo lugar, el Título IV del RSEIA referido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental señala ciertas directrices respecto de los OAECAS. En este sentido el artículo 24 señala que *“Los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participarán en la evaluación ambiental del proyecto o actividad serán aquellos que cuenten con atribuciones en materia de permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales respecto del proyecto o actividad en particular.”*, la cual añade será facultativa. Luego, el artículo 25 trata sobre el Comité Técnico, el cual deberá reunirse y elaborar un acta de evaluación antes de la dictación del Informe Consolidado de Evaluación.

Posteriormente, el Párrafo 4° de este mismo Título en análisis, explica sobre la instrucción del procedimiento de evaluación de las Declaraciones de Impacto Ambiental y en ningún lado se exige la realización de una visita a terreno. Lo mismo ocurre en el Párrafo 3° respecto al procedimiento de los Estudios de Impacto Ambiental.

Por tanto, como es posible observar no es una obligación dentro del procedimiento de evaluación realizar una visita a terreno, sino que el SEA las organiza para que principalmente el evaluador tenga conocimiento en primera persona y en terreno, de qué hay en el predio del proyecto, de manera de contrastar así con la información proporcionada por el titular. Y con este mismo propósito es que se invita a los distintos Servicios que participarán del proyecto. Por lo que se trata de una actividad esencialmente voluntaria dentro de la evaluación del Proyecto.

Por tanto, que en esta oportunidad no hayan asistido más OAECAS que un representante de la SEREMI de Desarrollo Social, no significa que exista una asimetría en la participación de la evaluación puesto que lo fundamental son los pronunciamientos que hacen los Servicios durante la evaluación conforme a sus competencias, lo que quedaron plasmados en los ICSARA e ICSARA Complementario.

A mayor abundamiento, no todos los proyectos cuentan con visita a terreno, las cuales por diversas razones no siempre es posible realizar, alguna de ellas por fuerza mayor como por ejemplo lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 o la Pandemia por COVID-19, que estamos viviendo hoy en día. En ninguno de estos casos, ya sea porque se decidió no hacer visita a terreno o porque no se pudo por fuerza mayor, no nos encontramos ante un vicio del procedimiento, puesto que estas visitas no son esenciales dentro mismo al no estar requeridas expresamente en el Reglamento.

Adicionalmente cobra importancia mencionar, que en este Proyecto se realizaron dos Comités Técnico, uno al principio de la evaluación con fecha 09 de octubre de 2019 y otro previo al Informe Consolidado de Evaluación con fecha 23 de julio de 2019, cuyos registros es posible ver en el expediente electrónico junto con la ficha de asistencia de quienes asistieron a esos comités, donde quedó constancia de la presencia de funcionarios de la SEREMI de Medio Ambiente, MOP, Desarrollo Social, Transporte, Minvu, DGA, Salud, Energía, entre otros.

En estos Comités Técnicos, los evaluadores explican de qué trata el proyecto, qué complejidades ven en el mismo, y se nutre a los distintos servicios que participan de la evaluación con información para efectos de que éstos puedan a su vez emitir sus pronunciamientos en base a sus respectivas competencias.

En este sentido, al ser un requisito exigido dentro del proceso de evaluación, los Comités Técnicos se han realizado bajo toda circunstancia, llevándose a cabo en este último periodo de crisis sanitaria, mediante Video Conferencia. Y como es posible ver, en el caso

de este proyecto se realizaron dos Comités, siendo la exigencia reglamentaria realizar solo uno, previo a la dictación del ICE.

Finalmente, sobre este punto de aparente asimetría producida por la inasistencia de algunos servicios públicos a la visita a terreno, resulta significativo señalar que incluso los servicios pueden no participar de la evaluación ambiental del proyecto o el SEA puede prescindir de sus pronunciamientos si estos no llegan a tiempo e incluso los mismos pronunciamientos no son vinculantes para esta institución, por tanto, con mayor razón no podría existir “*un actuar desprolijo, insuficientemente riguroso e inadecuado parte de las autoridades administrativas convocadas*”, al no concurrir a una visita a terreno, que como ya se dijo no es requisito de la evaluación.

Por tanto, el SEA cumplió con todos y cada uno de los actos concatenados que exige el Reglamento para efectos de contribuir con la adecuada formación de juicio técnico y legal sobre el proyecto y sus características, sumándole incluso actos que no son esenciales, como la visita a terreno y el Comité Técnico al principio de la Evaluación. Y como bien dice la reclamante, la evaluadora del proyecto y el evaluador PAC del SEA, pudieron tener un acercamiento con el territorio y su realidad, contrastando lo señalado en la DIA con lo efectivamente visto en aquella visita. Por tanto, la encargada de llevar adelante el proceso de evaluación tuvo la posibilidad de nutrirse de aquella información.

2.8. En cuanto al ingreso vía Estudio de Impacto Ambiental.

Señalan en este punto los reclamantes que, el proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” debió evaluarse vía Estudio de Impacto Ambiental pues a su respecto concurren las causales establecidas en el artículo 11 letra a) y c) de la Ley N° 19.300.

En términos generales, el proyecto fue evaluado ambientalmente de manera rigurosa de acuerdo lo establece la Ley N° 19.300 y el RSEIA. Se hizo un análisis de cada uno de los componentes ambiental y se evaluó si el proyecto generaba o presentaba algunos de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley 19.300, las que corresponden al riesgo para la salud de la población; efectos adversos sobre recursos naturales; reasentamientos de comunidad humanas o alteración significativa de los sistema de vida y costumbres de grupos humanos; localización en o próxima a poblaciones, recursos o áreas protegidas; alteración significativa del valor paisajísticos o turístico de la zona y; alteración a monumentos o sitios pertenecientes al patrimonio cultural.

De dicho análisis, en base a la información proporcionada por el titular, se descartó que el proyecto generará alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11.

A mayor abundamiento, se debe tener en consideración su Ilustre Tribunal, que durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto en cuestión, ningún Órgano de la

Administración del Estado con Competencia Ambiental refirió en sus pronunciamiento de que el Proyecto debiese haber sido evaluado a través de un EIA y no una DIA, lo que da cuenta que las entidades con competencia específica tampoco, al igual que el SEA, consideraron que los efectos ambientales que generaría el proyecto pudieran ser calificados como significativos para determinar que este se debía evaluar como un EIA.

Es más, los OAECAS hicieron sus respectivas observaciones de acuerdo a sus competencias, en miras de despejar cualquier duda aparente que existiría sobre el proyecto, las cuales quedaron plasmadas en el ICSARA e ICSARA Complementario. Finalmente, estos órganos que participaron en la evaluación se manifestaron conforme.

2.1.1 Sobre Supuesto Riesgo para la Salud de la Población

En primer término, se indica que el hecho de que un proyecto genere emisiones no significa que esto afectará necesariamente la salud de las personas, pues de lo contrario no podría ejecutarse ningún proyecto en la Región Metropolitana o en aquellas zonas del país declaradas latentes o saturadas. Sin perjuicio de lo anterior, es que como parte de la evaluación ambiental se hace un análisis de las emisiones que el proyecto generará, a la luz del D.S. N° 31/2016 que actualizó el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la Región Metropolitana, el cual exige mediante el artículo 64 compensar en un 120% las emisiones cuando estas superen el límite establecido en dicho artículo.

Por otra parte, es menester revisar la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental “Riesgo para la Salud de la Población” emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental el año 2012, la que señala que *“la sola presencia de contaminantes en el ambiente no constituye necesariamente un riesgo para la salud de las personas. Para que se genere o presente riesgo para la salud debe existir una fuente contaminante, un receptor, que en este caso corresponde a una población humana, y la posibilidad de migración del contaminante hasta un punto de contacto con el receptor, es decir, una ruta de exposición completa o potencialmente completa. Si no hay posibilidad de contacto entre personas y contaminantes, no hay posibilidad de exposición y no hay riesgo para la salud de las personas.”*¹ (Énfasis agregado). Añade la guía que *“En los casos en que estos tres elementos estén presentes en forma previa a la ejecución de un proyecto o actividad (p. ej., zona saturada, área en estado de saturación), en el ámbito del SEIA lo relevante es evaluar si éste puede aumentar la probabilidad de generarse un efecto adverso sobre la salud, es decir, aumentar el nivel de riesgo existente previo a su ejecución. De ser así, se estaría también en presencia del efecto, característica o circunstancia de la letra a) del artículo 11.”*²

En lo que respecta al proyecto, se puede señalar que el hecho de generar emisiones no implica necesariamente un riesgo para la salud de la población. Sin perjuicio de ello, el titular debe hacerse responsable de las emisiones que generará, y que en aquellos casos

en que se superen los parámetros establecidos, deberá compensar, agregando además las medidas de gestión ya señaladas que permitirán reducir las emisiones de material particulado principalmente y gases de combustión.

A mayor abundamiento, este proyecto no generará un impacto significativo a la salud de las personas, dado que el aporte de este representa aumentos marginales a la situación basal, en un tiempo acotado y dichas emisiones se compensarán en un mayor porcentaje. De esta manera, se descarta un riesgo a la salud de la población por la ejecución del proyecto, y por ende la evaluación del mismo mediante un EIA, puesto que se descartó que concurriera en la especie la causal establecida en el artículo 11 letra a) de la ley 19.300.

En este sentido, es importante tener en cuenta lo resuelto por este mismo Tribunal en la causa Rol- 165-2017 referido al proyecto “**Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, CIGRI**”, en el cual se indica que “*resulta del todo esencial no confundir las medidas que se contemplan en el PPDA RM con la superación de una norma de calidad primaria o secundaria, pues, se trata de instrumentos de gestión ambiental distintos y con objetivos diversos. En efecto, mientras que la superación de los valores establecido en el PPDA R; tiene como consecuencia la compensación de emisiones en una 150%, el incumplimiento de una norma de calidad de aire podría implicar efectivamente la existencia de un riesgo para la vida o salud de la población, caso en el cual procedería la declaración de zona latente o saturada por el Ministerio del Medio Ambiente y la posterior dictación de un Plan de Descontaminación y/o Prevención.*”¹⁶

Por otra parte, el órgano competente para pronunciarse sobre este tema es la SEREMI de Medio Ambiente, la cual hizo sus observaciones a la DIA mediante ORD N° 947 de 11 de octubre de 2018, a la Adenda mediante ORD N° 92 de 29 de enero de 2019 y a la Adenda Complementaria mediante ORD N° 600 de 17 de julio de 2019, en la cual realizó ciertas correcciones en base a los valores declarados por el titular en el referido Anexo 2.1, lo que quedó plasmado en la RCA Considerando 4.3.4.1, y condiciona su aprobación a la presentación de un Plan de Compensación de Emisiones.

Es así finalmente, como en el punto 6.1 del Informe Consolidado de Evaluación quedó establecido cómo se justificó que el proyecto no presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos.

En el caso de las emisiones atmosféricas se indicó que “*De acuerdo a los cálculos actualizados de emisiones atmosféricas, adjuntos en el Anexo 2.1 de la Adenda Complementaria, Complementaria y a lo señalado por la SEREMI de Medio Ambiente mediante Ord. N° 600 de fecha 17/07/2019 en relación al cumplimiento del D.S. N° 31/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, el proyecto debe compensar emisiones de MP10eq. A partir del año 4. Adicionalmente, las emisiones del año 15 en adelante y que*

¹⁶ Considerando Centésimo sexagésimo tercero.

corresponden a la fase de operación, deberán ser compensadas de manera permanente. Sin perjuicio de ello, el titular considera implementar medidas de gestión y compromisos para la fase de construcción, de acuerdo a lo indicado en el punto 6 del anexo 2.1 de la Adenda Complementaria”

2.1.2 Sobre Supuesta Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos

La alegación de los reclamantes recae en lo comprometido por el Titular en su DIA no es en absoluto suficiente para precaver los riesgos de saturación vial del área de influencia del Proyecto. Además, añaden que el sector requiere de planificación por parte de la autoridad que impide estimar que se deban aprobar proyectos inmobiliarios sin haber sido evaluados por un Estudio de Impacto Ambiental. Finalmente sostienen que el Titular no puede ampararse enteramente en el EISTU para descartar que el aumento del flujo vehicular vaya a afectar el entorno adyacente en términos de las normas reseñadas.

En primer lugar, es preciso señalar que, en cuanto a compatibilidad territorial, el proyecto es compatible con los usos de suelo establecidos en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes que le aplican al predio donde se emplazará el Proyecto.

En este sentido, creemos fundamental hacer presente, como ya mencionamos en el punto 2.2, que el SEIA es un instrumento de gestión ambiental de tercer orden, que requiere de otros instrumentos de gestión ambiental (de primer y segundo orden) para una adecuada gestión ambiental. En consecuencia, el *“SEIA se nutre de otros instrumentos o herramientas de gestión ambiental de mayor relevancia para un adecuado funcionamiento: normas de calidad, de emisión, planes de prevención y descontaminación, pero en materia inmobiliaria los instrumentos de planificación territorial cobran una gran relevancia para la evaluación ambiental, determinan el uso de suelo, contemplan la evaluación ambiental estratégica y conllevan procesos de participación ciudadana para su creación [en la EAE]. Los resultados de la evaluación ambiental de proyectos se entienden y justifican a la luz de dichos instrumentos superiores.”*¹⁷

En este sentido el SEIA hace su evaluación ambiental restrictivamente a los proyectos o actividades concretas, que se encuentran emplazados en una ubicación particular y no le corresponde, por ejemplo, el análisis de ubicaciones alternativas⁴, por ello no extiende su análisis a las políticas planes y programas dentro de las cuales tales proyectos o actividades se enmarcan, las que deben ser evaluadas estratégicamente, como lo establecen los artículos 7 bis, 7 ter y 7 quáter de la ley 19.300⁵. Por tanto, es mediante EAE en donde se debe incorporar los elementos de protección ambiental a las políticas y planes de carácter normativo general, como son los planes reguladores, los que

¹⁷ Guía para la Descripción de Proyectos Inmobiliarios en el SEIA, pág. 5.

corresponden a instrumentos superiores necesarios y fundamentales para una adecuada gestión ambiental que sirven de referencia al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.⁶ En consecuencia, se excedería en las facultades legales que contempla el SEIA hacerse cargo de la planificación territorial de una determinada área, que en este caso particular sería la comuna de Vitacura.

Por tanto no es viable, porque no está dentro de las competencias del SEA, lo señalado por los recurrentes al indicar que *“El sector, en cambio, requiere de planificación por parte de la autoridad que impide estimar que se deban aprobar proyectos inmobiliarios sin haber sido evaluados por un Estudio de Impacto Ambiental, pues solo de esa forma se tendrán los estudios, antecedentes, descripciones de detalle y medidas de mitigación apropiadas y debidamente descritas y garantizadas en su cumplimiento, adecuadas para que el Proyecto aborde de manera íntegra y suficiente -si ello fuere posible- los impactos que anticipa el informe de la consultora especialista, Sra. Gloria Hutt Hesse.”*

En segundo lugar, respecto al EISTU, este tiene como objetivo esencial demostrar, desde la perspectiva del sistema de transporte, la factibilidad que tiene la instalación de una determinada actividad en el área urbana como es el caso de la construcción y habilitación de proyectos habitacionales, además de establecer determinadas medidas de mitigación para impedir dicha afectación.

Ahora bien, en relación con la evaluación ambiental, los titulares de proyectos que presentan DIA o EIA no les es obligatorio presentar el EISTU a dicha evaluación⁷, puesto que se trata de un estudio sectorial analizado por un organismo distinto al SEA con competencias específicas sobre dicha materia como es la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, y donde participan otras entidades como la Municipalidad respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el titular cuente con un EISTU aprobado previo a la evaluación ambiental del proyecto en el SEIA, las medidas que resulten de este podrán considerarse como partes, obras o acciones del proyecto que deben describirse en el capítulo de Descripción del Proyecto de la DIA o EIA. En este sentido y, teniendo el EISTU un carácter sectorial, sólo puede ser considerado como parte de un proyecto en el caso de que el titular decida incluirlo como parte de éste, a fin de descartar, en parte, la generación de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 y, específicamente lo relacionado al artículo 7, letra b) del RSEIA, que se refiere a la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento que pueden generar una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos del área de influencia.

Por tanto, la incorporación de las medidas descritas en el EISTU son incluidas de manera voluntaria por el titular, las que en sí no responden a una iniciativa de éste, sino que a

medidas impuestas por la autoridad sectorial. Consecuentemente, la ejecución de dichas medidas es necesaria para obtener finalmente la recepción final del Proyecto.

En virtud de lo anterior, es que el titular del Proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” presentó las medidas aprobadas en el EISTU, las cuales forman parte de las obras, acciones y partes del proyecto, las que fueron evaluadas y aprobadas por la autoridad sectorial y que permiten en conjunto con otros estudios presentados tales como análisis de movilidad peatonal, vehicular y de transporte público, descartar el impacto establecido en el artículo 7 del RSEIA, esto es reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

Finalmente es preciso señalar que este tema fue altamente discutido durante la evaluación, donde los OAECS con competencia ambiental hicieron sus respectivos pronunciamientos para ahondar con mayor detalle en el descarte de este literal. En este sentido tanto la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones (ORD. AGD. N° 8976/2018), la I. Municipalidad de Vitacura (ORD. D.M.A.O N° 204 de 10 de octubre de 2018), la SEREMI MOP (ORD. N° SRM RMS N° 154/2018 (sea - seia -dia) de fecha 09 de octubre de 2018), la SEREMI de Desarrollo Social⁸ (ORD. N° 1910 de fecha 09 de octubre de 2018) se pronunciaron respecto a la DIA. Posteriormente, lo hicieron a la Adenda la SEREMI MOP mediante ORD. N° SRM RMS N°20/2019 (sea-seia-adenda) de fecha 21 de enero de 2019; la Municipalidad de Vitacura mediante ORD. D.M.A.O N°15 de fecha 25 de enero de 2019 y la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones mediante ORD. AGD. N° 1232 de fecha 04 de febrero de 2019. La SEREMI de Desarrollo Social se pronunció conforme a la Adenda mediante ORD. N° 0303 de 31 de enero de 2019. Finalmente, las autoridades restantes se pronunciaron conforme al Proyecto: SEREMI MOP mediante ORD N° 180/2019 (sea-seia-adenda complementaria) de fecha 09 de julio de 2019; la Municipalidad de Vitacura mediante ORD. D.M.A.O N°151 de fecha 10 de julio de 2015 y la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones mediante ORD. AGD. N° 6870 de fecha 11 de julio de 2019.

Por otra parte, en cuanto al último argumento que indican los reclamantes sobre esta alegación, es posible señalar como primer punto, que las tasas de generación punta mañana y punta tarde (tabla 6 del Anexo 12.3.1 de la DIA) y con la cual se realizaron los cálculos del análisis peatonal se justificaron bajo un escenario conservador. Al respecto, el titular se refiere a ellas en el punto 2.2 del Anexo 12.3.1 de la DIA donde señala lo siguiente: *"(...) se entregan las tasas de generación y atracción en los períodos punta mañana laboral y punta tarde laboral. Cabe considerar que puede existir un rango de variación de estas tasas producto de distintos elementos que presenta el entorno, por lo que se proponen tasas que sobredimensionan la cantidad real de personas que se aportarán como peatones, además se plantean bajo el contexto de evaluar el peor escenario"*.

A partir, de dichas tasas y considerando el cálculo de los residentes del proyecto inmobiliario (4.410 residentes) para lo cual el titular utilizó el factor de 3,2 habitantes por departamento (547 departamentos), según cifra estimada a partir del censo 2017 y los 2.660 habitantes estimados para el *Apart Hotel* (938 apartamentos), (Anexo 12.3.1 de la DIA, pág. 7 de 30), se estimó que la cantidad de peatones que aportará el proyecto en horario punta mañana y punta tarde sería de 1.323 personas.

Bajo ese escenario, en el Anexo 12.3.1 de la DIA "Análisis de Movilidad" se realizó el análisis de la capacidad de las veredas y los flujos proyectados con la finalidad de determinar si el proyecto generaría saturación de las vías peatonales de acuerdo a lo dispuesto en el "Manual de Vialidad Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo" referido a las densidades representativas para caracterizar el flujo. Como resultado, en la tabla 11 del citado Anexo 12.3.1, el titular presenta los cálculos que determinan que para las vías analizadas el tránsito se considera libre, es decir, tiene un flujo menor a 0,4 peatones/m².

Si bien, en lo concreto se observa una diferencia en cuanto a la población total del proyecto presentada y analizada en el Anexo 12.3.1 de la DIA (4.410 residentes) y lo presentado y analizado en la tabla 23 de la Adenda (4.377 residentes), producto de que en la Adenda el titular multiplica por el factor 2,8 hab/depto. el número de plazas del *Apart Hotel*, resultando 2.626 residentes y no los 2.660 mencionados en el Anexo 12.3.1 de la Adenda. Con ello, la población del proyecto resulta ser 4.377 residentes a la cual se le aplica la tasa de generación y atracción propuesta por el titular y por tanto, la cantidad de peatones en punta mañana y punta tarde sería de 1.313 personas, con lo cual se realiza el mismo análisis, previamente detallado.

Finalmente, y como se observa en la tabla 36 de la Adenda (pág. 1.22 y 1.23), con el total de 4.377 habitantes del proyecto igualmente se verifica un tránsito libre en las tres vías analizadas y en ambos horarios punta. Lo que tiene lógica, ya que con un escenario más desfavorable (4.410 residentes) se obtuvo el mismo resultado.

Es decir, la diferencia entre ambos casos no interfiere en el resultado final y en el análisis de la capacidad de las veredas para el desplazamiento peatonal que es el punto relevante dentro del literal b) del art. 7 del DS 40/2012 MMA.

2.9. Sobre la Sub-declaración de efectos relevantes del proyecto en relación a las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago.

Señalan los reclamantes que la determinación que hace el Titular de la relación del Proyecto con tales objetivos es completamente insuficiente, llevando a ello a un vicio de la Evaluación Ambiental al no haberse objetado el punto en ninguna de los dos Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la DIA.

En relación a la Estrategia Regional de Desarrollo, el titular acompañó en la DIA una tabla donde se indica las estrategias y de qué manera el proyecto es neutro, favorable o perjudicial con cada uno de los objetivos estratégicos asociadas a las obras, partes o acciones del proyecto evaluado, que dicen relación con objetivos estratégicos que impulsan la integración, la seguridad y sustentabilidad de la región. En este contexto, en la tabla 4-1 de la DIA se muestra dicho resultado, indicando en algunos casos una relación neutra y en otros, una relación favorable entre la ERD (y sus respectivos objetivos) y el proyecto, debidamente fundamentado.

En este sentido el análisis que hizo el titular fue claro, habiendo solo algunas observaciones que quedaron plasmadas en el ICSARA y luego respondidas en la Adenda que dicen relación con el Lineamiento Región Limpia y Sustentable (respuesta 7.1 y 7.2). El Gobierno Regional se pronunció conforme al proyecto mediante los ORD. N° 197 de fecha 17 de enero de 2019.

En cuanto al Plan de Desarrollo Comunal, el titular relaciona su proyecto con dicho plan dando cuenta que este promueve 5 de las 35 estrategias, impulsando el desarrollo institucional, social y humano, económico local, urbano y ambiental.

Al respecto, la I. Municipalidad de Vitacura no emitió observaciones referentes al PLADECO durante la evaluación, pronunciándose conforme mediante ORD. DMAO N° 151 de 10 de julio de 2019.

A mayor abundamiento, corresponde indicar que dentro del SEIA es obligatorio requerir pronunciamiento al Gobierno Regional y a las Municipalidades para que se pronuncien sobre la relación del Proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y planes de desarrollo comunal respectivamente, lo que no significa que estos instrumentos sean obligatorios. En efecto, **la Municipalidad sólo tiene competencia ambiental dentro del SEIA en aquellos casos en los cuales se le solicita pronunciarse sobre la compatibilidad territorial del Proyecto**, en los términos del artículo 8°, inciso 3°, de la Ley N° 19.300.

Teniendo esto en consideración, se debe dejar en claro para el análisis de este acápite que **las políticas, ya sean regionales o comunales, respecto de las cuales el Titular de todo proyecto se encuentra obligado a informar como el proyecto se relaciona con ellas, no son vinculantes para la evaluación del Proyecto, como sí lo son los pronunciamientos municipales en materia de compatibilidad territorial, en tanto ellos sean adecuados al caso concreto, en los términos del artículo 8°. Por lo mismo, el legislador ha tratado ambas hipótesis situacionales en artículos separados.**

Esto que se viene diciendo es lo que quiere significar la expresión “relacionan” que se utiliza en el artículo 9 ter, que establece lo siguiente:

“Artículo 9º ter. - Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal.

La Comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.”

En efecto, la relacionar, en su sentido natural y obvio, según la Real Academia Española, consiste “en hacer relación de un hecho” o “establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos”, en tanto que relación no sería otra cosa que “conexión, correspondencia de algo con otra cosa”, significado que en ningún caso implica un carácter obligatorio o vinculante. **Por tanto, el Titular del Proyecto no está obligado a adecuarse a una política municipal, como es el PLADECO, sino solo a explicar cómo se relaciona el Proyecto con ella, existiendo OAECA que deberán efectuar los pronunciamientos técnicos (no políticos) sectoriales que correspondan.**

Tal conclusión se ve ratificada por la propia historia de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, que introdujo los artículos 8° y 9° ter actuales a la Ley N° 19.300. En efecto, en lo que respecta al artículo 8° antes referido, consta en el Segundo Trámite Constitucional, específicamente en el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, de fecha 04 de agosto de 2009, que el Honorable Senador Allamand, preguntó si los respectivos informes del Gobierno Regional o de la Municipalidad tienen el carácter de obligatorio, y en el caso que éstos fueren contradictorios con un informe sectorial, cual es el informe o la autoridad que prevalece. Sobre el particular, y fuera de otras consideraciones, quien fuera la Ministra del Medio Ambiente sostuvo que “[s]i el contenido del pronunciamiento técnico es claro éste debe ser respetado (...)”. Lo anterior, permite afirmar con seguridad, entonces, que el espíritu del legislador, al redactar el inciso 3° del artículo 8° actual de la Ley N° 19.300, era que efectivamente se informase por parte de la autoridad municipal, sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado, actuando como OAECA para estos efectos, pero que la opinión municipal que tuviera que ver con políticas y planes no fuera vinculante ni primara sobre el pronunciamiento de otros OAECA en el contexto de la evaluación técnica realizada en el SEIA.

Por su parte, respecto del artículo 9 ter, en la historia fidedigna de la Ley N° 20.417 consta que, en el Primer Trámite Constitucional, en la discusión en sala de fecha 05 de mayo, el Honorable Diputado Accorsi recordó en el debate que la Ministra del Medio Ambiente había dejado constancia que el proyecto “[g]arantiza que los gobiernos regionales y las

municipalidades del área del proyecto **informen** sobre la compatibilidad con las políticas y planes de desarrollo regional. (artículo 9 ter)”. Dicha comunicación o informe no aparece en carácter de vinculante, entonces, en el trámite legislativo. **Ello se ve ratificado por el hecho de que, una redacción preliminar del que se proponía como nuevo artículo 9 en la tramitación del proyecto de ley, utilizaba la voz ajustar en vez de relacionar, para ambos incisos.** Esto es determinante, pues distinto es que los proyectos deban ajustarse con las políticas municipales, a tener que verificar como se relacionan los unos con los otros. **El reemplazo de la expresión “ajustar” por “relacionar” aparece entonces como indicativo de la intención del legislador.**

Incluso, en una línea similar, se ha llegado a explicitar por la doctrina que “(...) en términos estrictos, las municipalidades no disponen dentro de su competencia permiso o autorización alguno que pueda ser calificado de relevancia ambiental, por lo que estricto sensu no forma parte del Comité Técnico (...). Lo cierto es que en el modelo chileno, la principal función de las municipalidades en el SEIA, es el de haber servido de canal de información pública, a efecto de la participación ciudadana.”¹⁸

Clarificado lo anterior, se tiene por consecuencia que cualquier alegación en torno que la evaluación técnica quedaría desvirtuada por el pronunciamiento municipal, no sería procedente, especialmente en un procedimiento de evaluación ambiental que ha sido realizado conforme a la ley, tanto en lo material como en lo procedimental.

Sin perjuicio de lo anterior, no se observa cómo pudo el análisis efectuado por el titular y analizado por las autoridades con competencia para ello, haber sido insuficiente, trayendo como consecuencia a ello un vicio en la Evaluación Ambiental, más aún cuando las autoridades pertinentes se pronunciaron conforme sobre este tema.

2.10. Sobre una Aparente incongruencia en cuanto a la Relación con las Políticas y Planes Evaluados Estratégicamente.

Para iniciar en este punto, es interesante indicar lo que establece el artículo 15 del Reglamento:

“Relación con las políticas y planes evaluados estratégicamente.

Los proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad con la Ley.

Para tal efecto, el proponente deberá identificar las políticas y planes evaluados estratégicamente que sean atingentes, así como la compatibilidad del proyecto o

¹⁸ JORQUERA ASTORGA, Eduardo (2017), Derecho Ambiental Chileno, Parte General, Thomson Reuters, Quinta Edición Actualizada, pp. 309-310.

actividad con el uso del territorio y los objetivos ambientales de tales políticas y planes.”

La solicitud de invalidación sobre este punto recae de manera específica por el punto 5.2.1 de la DIA, correspondiente a una Modificación del Plan Regulador Comunal de Vitacura denominada “Norma de Edificación Área de Riesgo de Remoción en Masa R-5”.

Esta modificación tiene ciertos objetivos ambientales, respecto de los cuales el titular relaciona su proyecto con ellos, los cuales efectivamente se condicen con dichos objetivos, correspondiente a: (i) Contribución de 64.239,81 m² de áreas verdes de uso privado. (2) Mantención de caminos durante la fase de construcción. (3) Compromiso de control del peso máximo de camiones para no dañar las vías estructurantes.

Al respecto la I. Municipalidad de Vitacura no hace observaciones, pronunciándose finalmente conforme mediante ORD. DMAO N° 151 de 10 de julio de 2019. En este mismo sentido, la Dirección Regional del SEA tampoco tuvo mayores dudas al respecto, debido a que a juicio de dicha autoridad la información proporcionada era suficiente y debidamente fundada.

III CONCLUSIONES

1. La acción de reclamación de autos es improcedente de acuerdo a la regla de la invalidación propia e impropia, toda vez que la solicitud de invalidación administrativa fue presentada con posterioridad a los 30 días requeridos, para que proceda la acción de reclamación establecida en el artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600.
2. No existe una supuesta falacia en la determinación del número de edificios del proyecto, toda vez que durante la evaluación se explicó que los edificios tendrían distintos módulos, lo cual también quedó en evidencia mediante imágenes que mostraban en forma clara las 26 estructuras.
3. No existe una insuficiencia de las consideraciones relativas a la Falla de San ramón, puesto que el titular presentó los antecedentes sobre el tema, a su vez la Municipalidad realizó observaciones en ese sentido y finalmente también fue abordado en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencia.

Asimismo, los Certificados de Informaciones Previas, tampoco dan cuenta que el terreno en donde se emplazará el proyecto esté afecto a un riesgo que haya sido establecido en el plan regulador comunal de Vitacura.

4. Respecto a la participación ciudadana, los reclamantes solicitaron en el proceso de invalidación administrativa la invalidación de resoluciones diversas a la RCA, las cuales fueron emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental y no por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana.

Además, como fue latamente explicado, los proyectos inmobiliarios no son de aquellos que generan cargas ambientales por no configurarse uno de los requisitos establecido para ello, como son los beneficios sociales. Por tanto, no procede abrir un proceso de participación ciudadana.

5. En cuanto a la disposición de residuos peligrosos, el almacenamiento de estos por un periodo máximo de 6 meses no va en contradicción con lo establecido en el Decreto Supremo N° 148 que establece el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, emitido por el Ministerio de Salud el año 2003.
6. Respecto a la consideración del elemento ruido, es posible señalar que el Proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo” debe dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica”. Esta norma establece ciertos parámetros cuyo cumplimiento es obligación para efectos de obtener una RCA favorable.

Además, se precisa que esto fue debidamente evaluado y las medidas de gestión propuesta por el titular para disminuir los niveles de ruido quedaron plasmadas en la RCA.

7. La determinación del acto a faena mínima se establece para efectos de tener un hito de inicio para el conteo del plazo para decretar la caducidad de una RCA. En este sentido, la instalación del cierre perimetral establecido en el Considerando 4.1 de la RCA, cumple a cabalidad con lo expresado en el artículo citado. Es evidente, que posteriormente vendrán otras acciones que irán conformando el desarrollo del Proyecto, pero el Reglamento solo exige uno de ellos, que será el que dé cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente. Por ende, el cierre perimetral del terreno, a juicio de este Servicio, sí cumple con lo preceptuado por la disposición reglamentaria.
8. En cuanto a la aparente asimetría entre titular del proyecto y funcionarios evaluadores, en la visita a terreno, se señala que este tipo de visitas no son esenciales dentro del procedimiento de evaluación. Además, importa tener en cuenta que estas son realizadas de manera voluntaria para dar cumplimiento con el rol preventivo que rige al SEA, en miras del bien común.

9. El proyecto fue evaluado ambientalmente de manera rigurosa de acuerdo lo establece la Ley N° 19.300 y el RSEIA. Se hizo un análisis de cada uno de los componentes ambiental y se evaluó si el proyecto generaba o presentaba algunos de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley 19.300, descartándose en base a la información proporcionada la existencia de alguno de los ECC.
10. En cuanto al riesgo de la salud de la población este proyecto no generará un impacto significativo a la salud de las personas, dado que el aporte de este representa aumentos marginales a la situación basal, en un tiempo acotado y dichas emisiones se compensarán en un mayor porcentaje. De esta manera, se descarta un riesgo a la salud de la población por la ejecución del proyecto, y por ende la evaluación del mismo mediante un EIA, puesto que se descartó que concurriera en la especie la causal establecida en el artículo 11 letra a) de la ley 19.300.
11. En cuanto a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos, se señala que el SEIA no es la herramienta para hacer un análisis de la compatibilidad territorial del proyecto, como esgrimen los reclamantes. A su vez, se recalca que el EISTU es un instrumento sectorial, cuyo uso en el SEIA es voluntario y de ser utilizado debe ser incorporado como parte del proyecto. Finalmente, se explica con datos cuantitativos por qué no existe una alteración significativa en los sistema de vida.
12. En relación a la Estrategia Regional de Desarrollo, no se observa cómo pudo el análisis efectuado por el titular y analizado por las autoridades con competencia para ello, haber sido insuficiente, trayendo como consecuencia a ello un vicio en la Evaluación Ambiental, más aún cuando las autoridades pertinentes se pronunciaron conforme sobre este tema. Se recalca también que la relación de los proyectos con estos planes es voluntaria.
13. Esta modificación tiene ciertos objetivos ambientales, respecto de los cuales el titular relaciona su proyecto con ellos, los cuales efectivamente se condicen con dichos objetivos, correspondiente a: (i) Contribución de 64.239,81 m² de áreas verdes de uso privado. (2) Mantención de caminos durante la fase de construcción. (3) Compromiso de control del peso máximo de camiones para no dañar las vías estructurantes.

Al respecto la I. Municipalidad de Vitacura no hace observaciones, pronunciándose finalmente conforme mediante ORD. DMAO N° 151 de 10 de julio de 2019. En este mismo sentido, la Dirección Regional del SEA tampoco tuvo mayores dudas al respecto, debido a que a juicio de dicha autoridad la información proporcionada era suficiente y debidamente fundada.

POR TANTO,

En virtud de lo expuesto, por disposiciones legales citadas y demás pertinentes, **SOLICITAMOS A ESTE ILUSTRE TRIBUNAL**, tener presente las consideraciones anteriores y, en definitiva, con el mérito de los antecedentes del proceso, rechazar en todas sus partes la acción de reclamación deducida, por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el Derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

OTROSÍ:

Solicitamos a SS. Ilustre, tener por acompañados los documentos que se enumeran a continuación, bajo consideración de los argumentos que se exponen más abajo:

1. Expediente administrativo del procedimiento de evaluación ambiental, que concluye con la Resolución Exenta N°467/2019, de fecha 19 de agosto de 2019. Para tener acceso al expediente, debe ingresarse al siguiente hipervínculo:

https://seagob-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sofia_hubner_sea_gob_cl/EoA_no_2IRBEpCFmq2eQrukB9_m4zN0ijfLUi1ehcv57xA?e=IrlBn8

2. Expediente administrativo, del procedimiento de invalidación, ante la Comisión de evaluación de la Región Metropolitana, que concluye con la Resolución Exenta N° 113 de fecha 18 de febrero de 2020. Para tener acceso al expediente, debe ingresarse al siguiente hipervínculo:

https://seagob-my.sharepoint.com/:f/g/personal/sofia_hubner_sea_gob_cl/EuCOfmZxmsVBo7ndq7qZUkIBbLfs_vM9L38ChSweBt0O_Q?e=PBzvDd

3. Certificado de autenticidad del expediente individualizado en el número 1 precedente.
4. Certificado de autenticidad del expediente individualizado en el número 2 precedente.

Considerando lo anterior, hacemos presente que, los dos primeros documentos (N°1 y N°2), son acompañados en este mismo escrito, en formato digital, con un hipervínculo que los redirige a los expedientes, en formato **ONE DRIVE**. En cuanto los documentos indicados en los N°3 y 4, son acompañados como adjuntos al presente informe.

Se acompañan los certificados anteriores no obstante que ambos expedientes del SEIA y en cualquiera de los hipervínculos antes citados, cuentan con firma electrónica avanzada quedando certificada su autenticidad.

Sin perjuicio de lo anterior, se encuentran disponibles los mismos documentos en los hipervínculos del E-SEIA que podrían ser traídos a la vista por SS. Ilustre bajo su preferencia:

- En el caso del N°1, referente al expediente administrativo del procedimiento de evaluación ambiental, se encuentra en el siguiente hipervínculo del SEIA:

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2141356973

- Por su parte, el N°2, referente al expediente administrativo, del procedimiento de invalidación, se encuentra en el siguiente hipervínculo del SEIA:
- https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientes.php?id_expediente=2144520759&idExpediente=2144520759

Solita Hibner

CONTENIDO

ANTECEDENTES DE HECHO	1
1. Antecedentes generales del proyecto “Conjunto Armónico Portezuelo”	1
2. Antecedentes generales de la solicitud de Invalidación en sede Administrativa, cuyo rechazo da origen al recurso de Reclamación de autos.....	2
3. Antecedentes del Recurso de Reclamación de Autos.....	3
FUNDAMENTOS DE DERECHO.....	7
1. Argumento de forma que determina la improcedencia del reclamo en autos - La acción de reclamación de autos es improcedente de acuerdo a la regla de la invalidación propia e impropia	7
2. Argumentos de fondo y la improcedencia de las alegaciones sostenidas por los reclamante en el procedimiento de autos	14
2.1. Supuesta Falacia en la determinación del número de edificios del Proyecto	14
2.2. Supuesta Insuficiencia de las consideraciones relativas a la Falla de San Ramón	16
2.3. Respecto a las consideraciones de la Comisión de Evaluación Ambiental sobre la Participación Ciudadana.	19
2.4. Sobre la Disposición de Residuos Peligrosos	24
2.5. Sobre el Elemento Ruido	25
2.6. Sobre la Determinación del Acto o Faena Mínima que dará inicio a la ejecución del Proyecto	30
2.7. Sobre la Aparente asimetría entre el titular del proyecto y funcionarios evaluadores, en la visita a terreno.....	31
2.8. En cuanto al ingreso vía Estudio de Impacto Ambiental.....	33
2.9. Sobre la Sub-declaración de efectos relevantes del proyecto en relación a las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago.....	39
2.10. Sobre una Aparente incongruencia en cuanto a la Relación con las Políticas y Planes Evaluados Estratégicamente.....	42
CONCLUSIONES.....	43
OTROSÍ:.....	46